



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**



**TESIS**

**El tráfico de influencias en su modalidad simulada como afectación de la  
garantía del bien jurídico correcta administración pública**

**Autor**

**Bach. Pasache Herrera Luis Anthony**

**Asesor**

**Mag. Cevallos de Barrenechea Carlos Manuel Antenor**

**Presentada para optar el título profesional de Abogado**

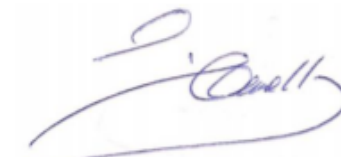
**Fecha de sustentación: 05 de setiembre del 2023**

**Lambayeque, 2023**

Tesis: “El tráfico de influencias en su modalidad simulada como afectación de la garantía del bien jurídico correcta administración pública”, presentada para optar el título profesional de Abogado por:



Bach. Pasache Herrera Luis Anthony  
Autor



Mag. Cevallos de Barrenechea Carlos  
Manuel Antenor  
Asesor

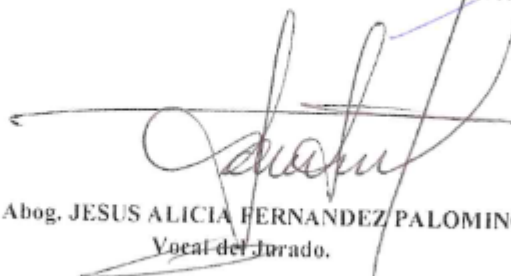
Aprobado por:



Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS  
Presidente del Jurado



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ  
Secretario del Jurado



Abog. JESUS ALICIA FERNANDEZ PALOMINO  
Vocal del Jurado.

## **Dedicatoria**

Mi tesis la dedico a Dios en primer lugar por darme fortaleza durante todos estos años y a mis padres porque siempre están a mi lado guiándome y llevándome por el camino correcto. A ustedes les dedico mi trabajo como agradecimiento a su esfuerzo y paciencia.

Los amo.

## **Agradecimiento**

Agradezco en primer lugar a Dios por iluminar mi día a día, dado que sin Él nada sería posible en la vida.

A mis padres, su fortaleza de ambos ha ayudado a seguir en esta vida, sus enseñanzas me han hecho evidenciar que nada es fácil en ningún aspecto de la vida, a ustedes les agradezco cada logro que obtengo.

A mi Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por albergarme durante 06 años, tiempo maravilloso en el que pude vivir muchas experiencias de todo tipo.

Por último, a mi asesor que me ha sabido ayudar en este arduo trabajo.



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**  
**UNIDAD DE INVESTIGACION**



**ACTA DE SUSTENTACIÓN**  
**A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 42-2023-UI-FDCP**

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Luis Anthony Pasache Herrera.**

Siendo las 11:00 a.m. del día martes 05 de setiembre del 2023 se reunieron en la Sala de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: " **EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN SU MODALIDAD SIMULADA COMO AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DEL BIEN JURÍDICO CORRECTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**", designados por Resolución N° 101-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 06 de mayo del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

**PRESIDENTE** : Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.**

**SECRETARIO** : Abog. **CESAR VARGAS RODRIGUEZ.**

**VOCAL** : Abog. **JESUS ALICIA FERNANDEZ PALOMINO**

La tesis fue asesorada por Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**, nombrada por Resolución N°101-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 06 de mayo del 2022.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°435-2023-FDCP de fecha 31 de agosto del 2023.


La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Luis Anthony Pasache Herrera** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO con la nota de 17 ( DIECISIETE ) en la escala vigesimal, mención de BUENO.**

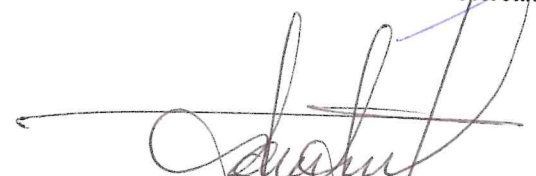
**Por lo que queda APTO** para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 11:50 a.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, martes 05 de setiembre del 2023

  
Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**  
Presidente del Jurado

  
Abog. **CESAR VARGAS RODRIGUEZ**  
Secretario del Jurado


  
Abog. **JESUS ALICIA FERNANDEZ PALOMINO**  
Vocal del Jurado.

## CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

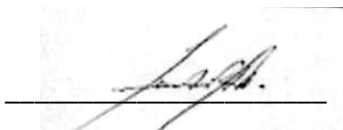
Yo, Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Luis Anthony Pasache Herrera, Titulada EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN SU MODALIDAD SIMULADA COMO AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DEL BIEN JURÍDICO CORRECTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 16% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 18 de junio del 2023



**Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea**  
DNI: 17415271  
ASESOR



**Bach. Luis Anthony Pasache Herrera**

DNI: 74858963

Autor

# EL TRAFICO DE INFLUENCIAS EN SU MODALIDAD SIMULADA COMO AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DEL BIEN JURÍDICO CORRECTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

## INFORME DE ORIGINALIDAD

16%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1

[hdl.handle.net](http://hdl.handle.net)

Fuente de Internet

6%

2

[repositorio.unprg.edu.pe](http://repositorio.unprg.edu.pe)

Fuente de Internet

2%

3

[repositorio.unjfsc.edu.pe](http://repositorio.unjfsc.edu.pe)

Fuente de Internet

2%

4

[repositorio.unprg.edu.pe:8080](http://repositorio.unprg.edu.pe:8080)

Fuente de Internet

1%

5

[qdoc.tips](http://qdoc.tips)

Fuente de Internet

1%

6

[repositorio.ucp.edu.pe](http://repositorio.ucp.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

7

[idoc.pub](http://idoc.pub)

Fuente de Internet

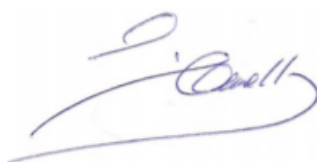
1%

8

[repositorio.udh.edu.pe](http://repositorio.udh.edu.pe)

Fuente de Internet

<1%



Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea  
DNI: 17415271  
ASESOR

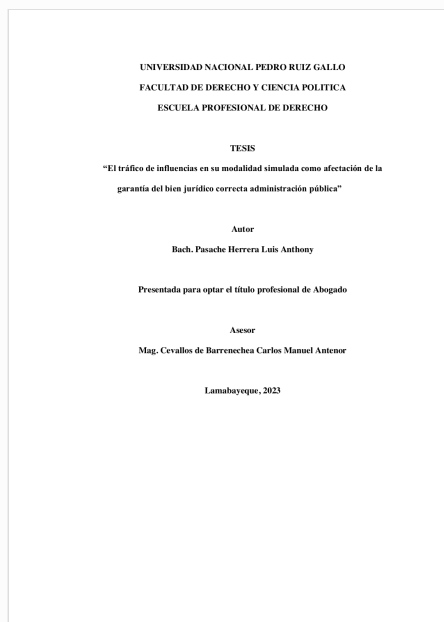


## Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Luis Anthony Pasache Herrera  
Título del ejercicio: ASESORIA PREGRADO  
Título de la entrega: EL TRAFICO DE INFLUENCIAS EN SU MODALIDAD SIMULADA ...  
Nombre del archivo: TESIS\_PASACHE\_HERRERA\_LUIS\_ANTHONY\_5\_1.docx  
Tamaño del archivo: 263.38K  
Total páginas: 89  
Total de palabras: 13,984  
Total de caracteres: 75,784  
Fecha de entrega: 18-jun.-2023 12:20a. m. (UTC-0500)  
Identificador de la entre... 2118078891



Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea  
DNI: 17415271  
ASESOR



## Índice

Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Índice .....	v
Índice de tablas .....	ix
Índice de ilustraciones .....	x
Resumen .....	xii
Abstract.....	xiii
Introducción.....	14
Capítulo I .....	17
Los aspectos metodológicos de la investigación .....	17
1.1. El planteamiento del problema .....	17
1.2. La formulación del problema.....	18
1.3. La justificación de la investigación.....	18
1.4. La importancia de la investigación .....	19
1.5. Los objetivos de la investigación.....	19
1.5.1. El objetivo general .....	19
1.5.2. Los objetivos específicos .....	19
1.6. La hipótesis de la investigación .....	20
1.7. Las variables de la investigación .....	20
1.7.1. Sobre la variable independiente .....	20

1.7.2. Sobre la variable dependiente .....	20
1.8. Los métodos aplicados en la investigación .....	20
1.8.1. El método exegético jurídico .....	20
1.8.2. El método sistemático jurídico.....	20
Capítulo II.....	21
La garantía del bien jurídico correcta administración publica.....	21
2.1. Los trabajos previos a la investigación .....	21
2.2. La concepción del bien jurídico.....	23
2.3. El bien jurídico protegido correcta administración pública.....	25
Capítulo III.....	27
El tráfico de influencias en su modalidad simulada y los principios generales del derecho.....	27
3.1. El delito de tráfico de influencias .....	27
3.2. Tráfico de influencias en su modalidad simulada.....	28
Capítulo IV .....	31
El análisis de los resultados .....	31
4.1. Resultados del análisis jurisprudencial .....	31
4.2. Resultados de la encuesta .....	33
Capítulo V.....	51
La contrastación de la hipótesis .....	51
5.1. La discusión de los resultados .....	51

5.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Interpretar doctrinariamente la garantía del bien jurídico y su connotación respecto a la correcta administración pública” .....	51
5.1.2. Discusión del objetivo específico: Observar el sentido normativo del tráfico de influencias en su modalidad simulada de acuerdo al control de los principios generales del derecho.....	58
5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar el criterio interpretativo respecto a la sanción del tráfico de influencias simuladas mediante la jurisprudencia”.....	63
5.2. La validación de las variables .....	65
5.2.1. Validación sobre la variable independiente “El tráfico de influencias en su modalidad simulada” .....	65
5.2.2. Validación sobre la variable dependiente: “La garantía del bien jurídico correcta administración pública”.....	67
5.3. Contrastación de la hipótesis .....	68
Conclusiones.....	69
Recomendaciones .....	71
Bibliografía .....	71
Anexos .....	74
1. Formato de evaluación de expertos.....	74
Resultados de la encuesta .....	77



## Índice de tablas

Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”.....	33
Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”.....	36
Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”.....	39
Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”.....	42
Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”.....	45
Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”.....	48
Tabla 7: Contrastación de la hipótesis .....	68
Tabla 8: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”.....	77
Tabla 9: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”.....	79
Tabla 10: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”.....	81
Tabla 11: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”.....	83
Tabla 12: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”.....	85
Tabla 13: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”.....	87

## **Índice de ilustraciones**

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1” .....	34
Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2” .....	37
Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3” .....	40
Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4” .....	43
Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5” .....	46
Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6” .....	49
Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1” .....	78

Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2” .....	80
Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3” .....	82
Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4” .....	84
Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5” .....	86
Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6” .....	88

## Resumen

El sentido que impulsa la investigación titulada “El tráfico de influencias en su modalidad simulada como afectación de la garantía del bien jurídico correcta administración pública”, tiene su origen en la advertencia de un problema sobre la eficacia en la aplicación que recibe esta tipología punitiva en la actividad jurisdiccional, básicamente dependiente de su vinculación con el bien jurídico que da origen a la descripción de la acción ilícita. Precisamente este aspecto es el que se aprecia como inadecuado en tanto que la condición simulada no tendría ningún efecto sobre la correcta administración pública, puesto que no trastoca el desarrollo de la gestión estatal, solo se verifica una lesión de los intereses particulares de la víctima.

Este análisis se ha diseñado en base a la observación de la realidad jurisdiccional, actividad que se ha realizado bajo la guía de los métodos de interpretación jurídica que van desde la exégesis jurídica hasta la verificación sistemática de la validez de la regla contenida en el tipo penal de tráfico de influencias en la modalidad simulada, con lo cual se ha podido corroborar la hipótesis inicialmente planteada, como resultado de las posturas asumidas en la discusión, quedando en claro la determinación final de la tesis referida a la ausencia de lesividad del bien jurídico lo cual no justifica la aplicación de una sanción por los actos descritos en el tipo.

Palabras clave: **Tráfico de influencias simulada, Garantía, Bien jurídico, Administración pública.**



### **Abstract**

The sense that promotes the investigation entitled "Influence peddling in its simulated modality as an affectation of the guarantee of the legal right, correct public administration", has its origin in the warning of a problem regarding the effectiveness in the application that this punitive typology receives in jurisdictional activity, basically dependent on its relationship with the legal asset that gives rise to the description of the illegal action. It is precisely this aspect that is seen as inadequate as the simulated condition would not have any effect on proper public administration, since it does not disrupt the development of state management, it only verifies an injury to the private interests of the victim.

This analysis has been designed based on the observation of the jurisdictional reality, an activity that has been carried out under the guidance of legal interpretation methods ranging from legal exegesis to systematic verification of the validity of the rule contained in the criminal offense. of influence peddling in the simulated modality, with which it has been possible to corroborate the hypothesis initially raised, as a result of the positions assumed in the discussion, making clear the final determination of the thesis referring to the absence of harmfulness of the legal right which does not justify the application of a sanction for the acts described in the type.

**Keywords: Simulated influence peddling, Guarantee, Legal good, Public administration.**

## **Introducción**

La nominación “El tráfico de influencias en su modalidad simulada como afectación de la garantía del bien jurídico correcta administración pública” señala el sentido de este trabajo académico destinado a la obtención del título profesional de Abogado, tesis diseñada en el ámbito penal para reconocer el verdadero sentido de protección que ofrece sobre el bien jurídico en el que ha sido encasillado dentro del ordenamiento jurídico punitivo.

Es importante señalar que la advertencia del problema sobre la vinculación con el bien jurídico ha surgido en comparación con el sentido de protección que sustenta a los delitos contra la administración pública, sector que permite la acción punitiva estatal con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la actividad destinada a la administración de la organización estatal, con los fines de servicio a la sociedad que se espera este libre de corrupción.

Tal justificación opera sobre los delitos contra la administración pública, en tanto las acciones cometidas constituyen acción ilícita dado que alteran dicha organización estatal, pero el caso específico analizado mediante la interpretación jurídico-normativa, permite corroborar que en efecto no existe una lesión directa del bien jurídico protegido. Tal hecho anula la justificación que permite contemplarla en el ámbito descriptivo penal, por lo mismo que se proyectó esta investigación para determinar la existencia de dicho problema y en función a los elementos que lo provocan establecer un marco de solución.

Conforme lo último señalado, en el Primer Capítulo de la investigación se ha trazado la secuencia de actos que se han seguido para desarrollar adecuadamente el análisis propuesto, es así que se plantea como formulación del problema: ¿De qué manera el tráfico de influencias en su modalidad simulada afecta la garantía del bien jurídico correcta administración pública? Además debe indicarse que este planteamiento incluyen los elementos conceptuales que como variables en su unión permitieron crear una respuesta a priori: Si, el tráfico de influencias en su modalidad simulada no afecta de manera lesiva la garantía del bien jurídico correcta administración pública; entonces se deberá considerar la despenalización de esta acción.

También en función a ello se han estructurado las metas de investigación a través de los objetivos específicos, que señala en primer lugar el de carácter general: Determinar la manera en que el tráfico de influencias en su modalidad simulada afecta la garantía del bien jurídico correcta administración pública; de igual modo las metas específicas indicaron: Interpretar doctrinariamente la garantía del bien jurídico y su connotación respecto a la correcta administración pública, Observar el sentido normativo del tráfico de influencias en su modalidad simulada de acuerdo al control de los principios generales del derecho, Analizar el criterio interpretativo respecto a la sanción del tráfico de influencias simuladas mediante la jurisprudencia.

De acuerdo a la secuencia de estos objetivos específicos se diseñó el contenido del Segundo Capítulo destinado a reconocer el sentido del bien jurídico correcta administración pública para establecer los lineamientos que permiten su

garantía, esta verificación se desarrolla en primer término desde la observación de los trabajos previos que académicamente determinan resultados que se vinculan con la propuesta de este análisis y han servido de punto de partida para tal evaluación. Luego el estudio de tal garantía trasladada al ámbito penal se analiza en función a los alcances teóricos que mediante sus posturas determinan lo que se debe entender como correcta administración pública en tanto bien jurídico.

También en el Tercer Capítulo se ha incorporado información sobre lo que se ha diseñado como el tipo penal de tráfico de influencias en la modalidad simulada en el que se describe el contenido de esta tipología para llevar el análisis al nivel sistemático, ello en tanto que se vincula la regla típica con las garantías que ofrece el ordenamiento jurídico constitucional y que adopta el derecho penal como condición garantista para la aplicación de la potestad punitiva que le asiste.

Seguidamente se ubica el Cuarto Capítulo destinado a la evaluación de la realidad, la misma que se hace en función a la observación crítica de la jurisprudencia nacional en la que se verifica la postura de la judicatura sobre el tema de viabilidad jurídica de este tipo penal en función a la protección del bien jurídico correcta administración pública. Finalmente se tiene el Quinto Capítulo en el que se construye la apreciación crítica y analítica del investigador, lo que se plasma a través de las tomas de postura sobre cada una de las discusiones que surgen de los objetivos específicos, esta determinación permite establecer el nivel de validación de cada una de las variables, alcanzando así la determinación final de la tesis, al igual que las conclusiones y recomendaciones.

El Autor.

## **Capítulo I**

### **Los aspectos metodológicos de la investigación**

#### **1.1. El planteamiento del problema**

De acuerdo a la estructura del tipo penal de tráfico de influencias, se puede observar la presencia de dos modalidades, siendo la segunda relacionada a la simulación como forma de ejecutar la acción delictiva aquella que interesa a la investigación dado que se percibe un problema respecto a la garantía del bien jurídico entendido como la correcta administración pública.

Atendiendo a que el sentido de garantizar un bien jurídico se vincula con la afectación del mismo de manera directa o indirecta, se percibe la ausencia de lesión lo que debería promover la intervención del Ius Puniendi del Estado para aplicar sanciones, aspecto que no se ubica como una correspondencia directa entre la acción desarrollada por el agente y la afectación de la administración pública, debido a que no se cumple con el control de los principios generales del derecho.

Según lo descrito se reconoce la condición innecesaria de la estructura que sanciona al tráfico de influencias simuladas, toda vez que no se condice con el principio de última ratio del Derecho Penal, así como el referido a la lesividad, necesaria para la imputación del delito y la correspondiente sanción. Ello es lo que se pretende demostrar en el análisis jurídico penal que proyecta esta investigación, a fin de sugerir la mejor opción para el cambio, acomodo o anulación de dicha estructura legislativa.

## **1.2. La formulación del problema**

¿De qué manera el tráfico de influencias en su modalidad simulada afecta la garantía del bien jurídico correcta administración pública?

## **1.3. La justificación de la investigación**

Se ha concebido esta investigación en base a la justificación social que se describe como parte de la seguridad jurídica que se debe tener en consideración como parte de las acciones del Estado para el correcto funcionamiento de su esquema y la aplicación de las reglas que se generan en el ordenamiento jurídico, lo cual conllevará al equilibrio social. En ese sentido se percibe la realidad afectada por una inadecuada configuración del tipo penal de tráfico de influencias simuladas que se pretende evaluar.

De otro lado en el aspecto jurídico, se percibe la justificación que inspira el desarrollo de la investigación, el hecho de que se tiene un bien jurídico protegido configurado para ser garantizado ante la lesión que se presume genera la acción de tráfico de influencias simuladas, como a la correcta administración pública; ello se identifica en razón de la ausencia de un carácter lesivo de dicha acción sobre la garantía de la administración en su ámbito público. Tal razón es la que permitiría establecer una sugerencia de cambio en la contemplación de dicho bien, al punto de proponer la erradicación de este tipo de acción de la tipología penal.

#### **1.4. La importancia de la investigación**

De acuerdo al alcance de la propuesta de esta investigación, se asume como importante en razón de que el análisis del bien jurídico en el caso del tráfico de influencias simuladas permite establecer un camino más idóneo para la tipificación de acciones delictivas que realmente constituyen actos lesivos contra los bienes jurídicos. Esta situación conlleva a la clarificación de la real intención del Derecho Penal desde su perspectiva garantista. Así, se entiende importante esta investigación en tanto que los principales beneficiarios son todos los miembros de la sociedad que se encontrarán en un esquema de seguridad jurídica.

#### **1.5. Los objetivos de la investigación**

##### **1.5.1. El objetivo general**

- Determinar la manera en que el tráfico de influencias en su modalidad simulada afecta la garantía del bien jurídico correcta administración pública.

##### **1.5.2. Los objetivos específicos**

- Interpretar doctrinariamente la garantía del bien jurídico y su connotación respecto a la correcta administración pública
- Observar el sentido normativo del tráfico de influencias en su modalidad simulada de acuerdo al control de los principios generales del derecho.
- Analizar el criterio interpretativo respecto a la sanción del tráfico de influencias simuladas mediante la jurisprudencia.

## **1.6. La hipótesis de la investigación**

Si, el tráfico de influencias en su modalidad simulada no afecta de manera lesiva la garantía del bien jurídico correcta administración pública; entonces se deberá considerar la despenalización de esta acción.

## **1.7.Las variables de la investigación**

### **1.7.1. Sobre la variable independiente**

El tráfico de influencias en su modalidad simulada.

### **1.7.2. Sobre la variable dependiente**

La garantía del bien jurídico correcta administración pública.

## **1.8.Los métodos aplicados en la investigación**

### **1.8.1. El método exegético jurídico**

Este método será aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto al tráfico de influencias simuladas; detalle que se confrontará con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.

### **1.8.2. El método sistemático jurídico**

La aplicación de este método ha permitido verificar el nivel de correlación que existe entre el tipo penal estudiado que sanciona el tráfico de influencias en su modalidad simulada, con respecto del ordenamiento jurídico en su conjunto, vale decir respecto a la vinculación o respeto con la normativa constitucional como eje principal y con el resto del ordenamiento plasmado en la legislación penal que opera sobre este tipo de acciones ilícitas.



## **Capítulo II**

### **La garantía del bien jurídico correcta administración publica**

#### **2.1. Los trabajos previos a la investigación**

Es importante tener en consideración a la tesis del bachiller David Teodoro Cerna Camones que lleva por título “El delito de tráfico de influencias: legitimación del acto simulado a partir de la configuración del bien jurídico protegido”, presentada a la Universidad San Martín de Porres, para optar el grado de maestro en Ciencias Penales; de la cual se ha recopilado la siguiente conclusión:

“Por nuestra parte, respecto al bien jurídico tutelado en el delito de tráfico de influencias simulada, compartimos la postura del prestigio y buen nombre de la administración pública. Nosotros consideramos que es el prestigio y buen nombre de la administración pública el afectado cuando un sujeto, inescrupulosamente, hace o invoca tener influencias no reales en la entidad pública para lucrar con ella”. (Cerna Camones, 2020, pág. 89)

Sobre el tema abordado es importante tener en consideración la tesis del Bach. Cesar Antonio Rodríguez Paucar que lleva por título “Estudio dogmático y propuesta para la despenalización del tráfico de influencias en su modalidad simulada: (Huacho-2016)”, presentada a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión para optar el título de Abogado, de la cual se ha recogido la siguiente determinación:

“La mala fama de la administración pública o la ineficacia de las normas jurídicas destinadas a la protección de la administración pública no debe ser motivo para mantener vigente un tipo penal que, a todas luces, no cumple en su materialización con el principio de lesividad”. (Rodríguez Paucar, 2018, pág. 105)

De otro lado se tiene la investigación de Wilson Fredy Valverde Cancinos que lleva por título “Estudios sobre la evolución doctrinaria y legislativa del delito de tráfico de influencias” presentada para optar el grado de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de la cual se ha extraído la siguiente conclusión:

“El delito de tráfico de influencias sobre todo con las últimas jurisprudencias a pasado prácticamente ha dejar de ser operativo como uno de los instrumentos legislativos más importante en la lucha contra la corrupción política en el país. Por lo que surge la imperiosa necesidad de asumir con voluntad política y reflexionar sobre la urgente necesidad de optar, bien por un cambio legislativo o bien por una reorientación jurisprudencial del mismo, que supere las posiciones jurídicas arcaicas sustentadas en concepciones medievales, con el objeto de percibir mejor la evolución y expansión delictiva de estos delitos, acorde con al situación socio-política actual y las concepciones modernas que se vienen desarrollando en otras legislaciones extranjeras avanzadas”. (Valverde Cancinos, 2017, pág. 316)

## **2.2. La concepción del bien jurídico**

De acuerdo al diseño teórico que supone el desarrollo de este capítulo, resulta de vital importancia la incorporación de fuentes que muestren el sentido de la protección que se genera sobre los bienes jurídicos en el ordenamiento penal, así pues, se tiene que el punto de partida de tal garantía se contempla en el esquema constitucional que ampara la normativa general, esto es que los derechos que se contemplan constitucionalmente adquiere el nivel de relevancia suficientes para que se consideren como objeto de protección.

Este tipo de evaluación sobre el nivel de protección dependerá entonces del sentido normativo constitucional atendiendo a que estas reglas se conciben “(...) como la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico nacional”. (Landa, 2013, pág. 14), tal jerarquía conmina al respecto irrestricto de los derechos por lo mismo que se justifica la intervención del ius puniendi del Estado para asegurar su protección mediante la persecución ante su incumplimiento y la sanción por las lesiones que se generen en razón de dicho acto delictivo.

De lo último se puede verificar que existe un vínculo directo entre la Constitución y el Derecho Penal, ello “(...) no es reciente sino más bien viene asentándose progresivamente desde inicios del constitucionalismo”. (Tribunal Constitucional, 2006), esta aseveración permite reconocer el sentido proteccionista que se tiene respecto a los derechos que representa el ámbito constitucional a través de sus garantías diseñadas en función a los intereses particulares, así como los de ámbito público, sobre todo esto último es lo que interesa a la investigación proyectada.

En si lo que comprende el concepto de bien jurídico protegido como “(...) un instrumento que sirve para condensar el aspecto esencial de la lesividad del delito, la razón genética de su tipificación, la finalidad básica de la contundente reacción estatal que surge contra él. Y esta comprensión sintética del desvalor esencial del delito sirve para precisar sus límites, para ponderar la reacción punitiva adecuada al mismo, para evaluar la legitimidad de su tipificación y de su pena”. (Villarroel, 2017, pág. 36)

Como se había señalado la función protectora del derecho penal se basa en la incidencia de las acciones que provocan un perjuicio sobre los bienes que se resguardan en el ordenamiento constitucional, esto es el carácter lesivo de las acciones delictivas, esto en tanto la intervención del principio de lesividad lo cual precisa que “(...) para que una conducta sea considerada ilícita, no solo requiere una realización formal, sino que además es necesario que dicha conducta haya puesto en peligro o lesionado a un bien jurídico determinado”. (Villavicencio, 2006, pág. 94)

Es importante señalar que la afectación del bien jurídico protegido debe tener un rango de consolidación en su ofensividad, así pues interesa para este tema asumir el bien jurídico y su lesión en tanto que “(...) el derecho penal solo sancionará las conductas que generen daños a terceros, dejando a salvo aquellas situaciones que pueden calificar de inmorales pero que de ningún modo afecten bienes jurídicos (...). (Ferrajoli, 2012, pág. 111) es en tal sentido que la evaluación de la intervención del ius puniendi del estado en función de los bienes jurídicos que

se pretenden proteger dependan de la condición lesiva, la cuestión moral que enfoca Ferrajoli debería salir del esquema de intervención o quizá su consecuencia debiera ser mínima.

### **2.3. El bien jurídico protegido correcta administración pública**

En primer lugar, resulta de imperio explicar el sentido que adopta el bien jurídico en la estructura jurídica del ordenamiento penal, así pues “(...) un estado social y democrático de Derecho solo deberá amparar como bienes jurídicos condiciones de la vida social, en la medida en la que afecten a las posibilidades de participación de individuos en el sistema social(...)”. (Mir Puig, 2005, pág. 129)

Como se puede apreciar, la función de los bienes jurídicos es representativa de la protección que se constituye como tarea principal del Estado a fin de mantener el equilibrio respecto a la estructura normativa y su cumplimiento, para lo cual se establecen diversos tipos en función a la garantía de ciertos derechos, tan es así que “El bien jurídico fundamenta la estructura básica de cada tipo penal y se presenta como el punto de partida de cada delito”. (Jescheck & Weigend, 2014, pág. 231)

Por lo mismo que tal protección se basa en un derecho fundamental individual que debe ser garantizado mediante las estrategias legislativas de parte del Estado, esto es en función a su política pública para la lucha contra el crimen, es importante por ello que la creación de los delitos que se configuren en el sistema deban estar adecuadamente recogidos de la realidad, “(...) lo que trae como consecuencia su necesaria identificación como punto de partida para luego analizar el tipo penal”. (Luzón Peña, 2016, pág. 88)

Ahora para lo que corresponde a la comprensión de los delitos contra la administración pública se debe entender que sólo pueden ser ejecutados por los que tienen bajo su responsabilidad el encargo de parte del propio Estado para conducir los destinos tanto estructurales como patrimoniales, la falta de cumplimiento de estas labores o el aprovechamiento es lo que se determina como la acción lesiva del bien jurídico que se entiende como la correcta administración pública.

Este reconocimiento o individualización de la acción permite identificar la necesidad de proteger dicho bien que corresponde a la administración del Estado en sus diferentes modalidades de acción; siendo así se entiende la configuración de los delitos en el ordenamiento penal, pero surge una cuestión bastante interesante sobre la cual la doctrina aún no se ha puesto de acuerdo, la cuestión simulada de este delito acaso deberá ser considerada también como una afectación a la correcta administración pública, pese a que la comete quien no forma parte del esquema funcionarial.

En cuanto a la configuración del tipo penal de tráfico de influencias en la modalidad simulada es un tema que deberá ser revisado y discutido en el desarrollo de esta investigación a fin de poder establecer una justificación jurídica válida que respalde la sugerencia de adecuación del bien jurídico para este delito simulado.

## **Capítulo III**

### **El tráfico de influencias en su modalidad simulada y los principios generales del derecho**

#### **3.1. El delito de tráfico de influencias**

El desarrollo de la actividad penal en torno a ciertas actividades tiene que ver con el nivel de complejidad de las acciones que presentan delitos, como es el caso de la verificación de la influencia en el ámbito de control estatal que debe aplicar el ius puniendi para sancionar las lesiones que se producen sobre el bien jurídico que protege, así se tiene a la condición del manejo de este factor de poder por el cual se requiere un pago o beneficio.

Las condiciones en las que se presenta el tráfico de influencias en el Perú desde el inicio de este milenio cuando fue reconocida una fuerte organización criminal liderada por un sujeto vinculado a la alta esfera presidencial como es el caso de Montesinos torres que condicione la participación de un gran grupo de personajes entre funcionarios y particulares enmarcados en la actividad de la influencia generada por el poder político.

En la actualidad para el Perú se ha establecido en el segundo artículo del Decreto Legislativo 1243 una tipificación que legislativamente en el año 2016 señala:

“El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público

que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa. Si el agente es funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho; inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal; y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”.

“Mediante el delito de tráfico de influencias se busca proteger la imparcialidad y la institucionalidad de las funciones que desempeña la administración pública al servicio de la sociedad. A partir de esta concepción, es necesario establecer una interpretación finalista o teleológica sobre el mismo que aconseja suprimir el elemento caso judicial o administrativo, ello, a partir de la premisa de que la totalidad de actos funcionariales son susceptibles de influenciar”. (Chanjan, y otros, 2020, pág. 290)

### **3.2. Tráfico de influencias en su modalidad simulada**

Debe señalarse en primer término que la penalización de la conducta que se orienta a la invocación de las influencias con el fin de conseguir un beneficio bajo el supuesto del favor de un tercer interesado, es precisamente la cuestión de la irrupción de la armonía que se supone impera en la administración del Estado, para lo que interesa a esta investigación se debe tener en consideración cuando menos la participación de dos posibilidades la circunstancia real de las influencias con la



activa participación del funcionario o la simulada lo que se conoce comúnmente como la venta de humo.

Deberá considerarse que la calificación de este tipo de acciones requiere de la verificación de parte del agente delictivo que se presenta a un tercero con interés, resulta invocar, alegar o aducir la existencia de influencias dentro de la administración pública con la intención u ofrecimiento de que el encargado sea funcionario o servidor emita un pronunciamiento de manera direccionada en determinado proceso sea judicial o administrativo para favorecer a dicho tercero. Como se ve, la acción de invocar tiene un carácter trascendente pues “permite comprender que la acción de invocar, por ejemplo, puede dar lugar con anterioridad, pero también puede darse de manera simultánea a la de recibir, hacer dar o prometer”. (Hurtado Pozo & Prado Saldarriaga, 2011, pág. 279)

Para ser más precisos el sentido de las influencias que se invocan deben estar orientadas hacia una cuestión de capacidades o posibilidades que conduzcan la acción de otra persona hacia un rumbo específico, así pues “la influencia en tanto objeto central del intercambio es entendido como cualquier situación de procedimiento o situación favorable en relación a tomas de decisión”. (Cugat Mauri, 2014, pág. 26)

Ahora bien, respecto a la simulación de este tipo de influencia lo que se denomina comúnmente como la “venta de humo”, se presenta en tanto que el actor delictivo no posee dicha posibilidad de influenciar sobre el funcionario. Lo cual implica que no existe la posibilidad de que se genere el favor ofrecido para el tercero

que busca orientar cierta decisión a su beneficio. Bajo esta postura se ha concebido en la doctrina la posibilidad de la despenalización de esta conducta en tanto que no se constituye como un acto lesivo del bien jurídico que se presume está tutelando de acuerdo a su posición en el ordenamiento jurídico.

Así pues, han surgido diversas posturas para sugerir un adecuado sentido de concepción respecto al bien jurídico que debe ser considerado en la construcción del tipo penal de las influencias simuladas pues “(...) el tráfico de influencias simulada, desde la perspectiva del bien jurídico tutelado del prestigio y buen nombre de la administración pública, debe ser criminalizado”. (Salinas Siccha, 2016)

## Capítulo IV

### El análisis de los resultados

#### 4.1. Resultados del análisis jurisprudencial

Teniendo en cuenta que el objeto de esta investigación orienta al análisis de los efectos que produce la construcción típica sobre el tráfico de influencia simulada sobre la presunta protección de los intereses públicos. En virtud a ello es que se ha seleccionado para dicho análisis un grupo de resoluciones que vinculadas al tráfico de influencias simuladas, determina una interpretación guiada hacia el sentido material de la administración pública, aspecto que se analiza de acuerdo al objetivo general de la tesis.

Exp	Planteamiento	Decisión
374-2015-Lima	La absolución del imputado se basa en un análisis de conducta relacionada con la regulación ética de una institución para reconocer si existe responsabilidad sobre su manera de actuar, lo cual tiene un resultado negativo; es decir que no se le puede atribuir responsabilidad penal por tal conducta. No se hace una evaluación directa de lo que representaría lesión del bien jurídico que afecta el delito de tráfico de influencias simuladas, esto es la correcta administración pública.	Son revocadas las resoluciones primigenias de la investigación por lo mismo que resulta la decisión por Absolver al imputado de la acción delictiva.

Exp. 00017- 2011-PI- TC	<p>La potestad sancionadora que posee el Estado debe prevalecer en tanto existan condiciones en la realidad que afecten la protección de los derechos, que para el caso de la correcta administración pública en tanto una cuestión de carácter general en cuanto a los intereses protegidos, cabe resaltar que no es posible desvirtuar características que los tipos penales describen como conductas lesivas del sistema.</p> <p>Tal es el caso de la construcción típica que describe el carácter simulado de los ofrecimientos propiciados por el agente; desde luego esta convicción se inclina a garantizar el bien jurídico, aun cuando no se ha discutido sobre el verdadero tenor de su objeto de protección.</p>	No se admite la modificación del artículo 400 del ordenamiento jurídico penal en el extremo del término simulada.
----------------------------------	---	---

OBSERVACIÓN: De acuerdo a la evaluación de estas sentencias, se aprecia en primer lugar que la condición simulada de la cual se describe en la discusión, no se puede reconocer como una afectación del bien jurídico correcta administración pública, en tanto que no entorpece las labores de esta organización estatal para cumplir su cometido; mientras que en segundo lugar se precisa como otra postura

## 4.2. Resultados de la encuesta

*Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”*

1. El tráfico de influencias en su modalidad simulada supone la acción delictiva en razón de un pacto sobre la influencia de un funcionario público inexistente.

Alternativas	Respuestas
a. De acuerdo	40
b. En desacuerdo	04
c. No opina	06
Total	50

*Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”*



**OBSERVACIÓN:**

El supuesto que se plantea en la afirmación sometida al criterio de los expertos en el ámbito jurisdiccional alcanzó un nivel del 80% que indican estar de acuerdo con lo señalado, esto es que se valida en función a este criterio, el hecho de que la descripción típica del tráfico de influencias en su modalidad simulada, precisa de la participación del interés que se muestra como acción volitiva para

establecer como posibilidad viable, la participación de un tercero que posee el cargo de funcionario.

Desde luego tal participación no resulta viable de manera concreta, es mas bien una representación ideal de parte del agente delictivo con la intención de dirigir la voluntad de la víctima, acción que supone la existencia de un acuerdo y la prestación de un servicio a cambio de beneficios para el sujeto activo.

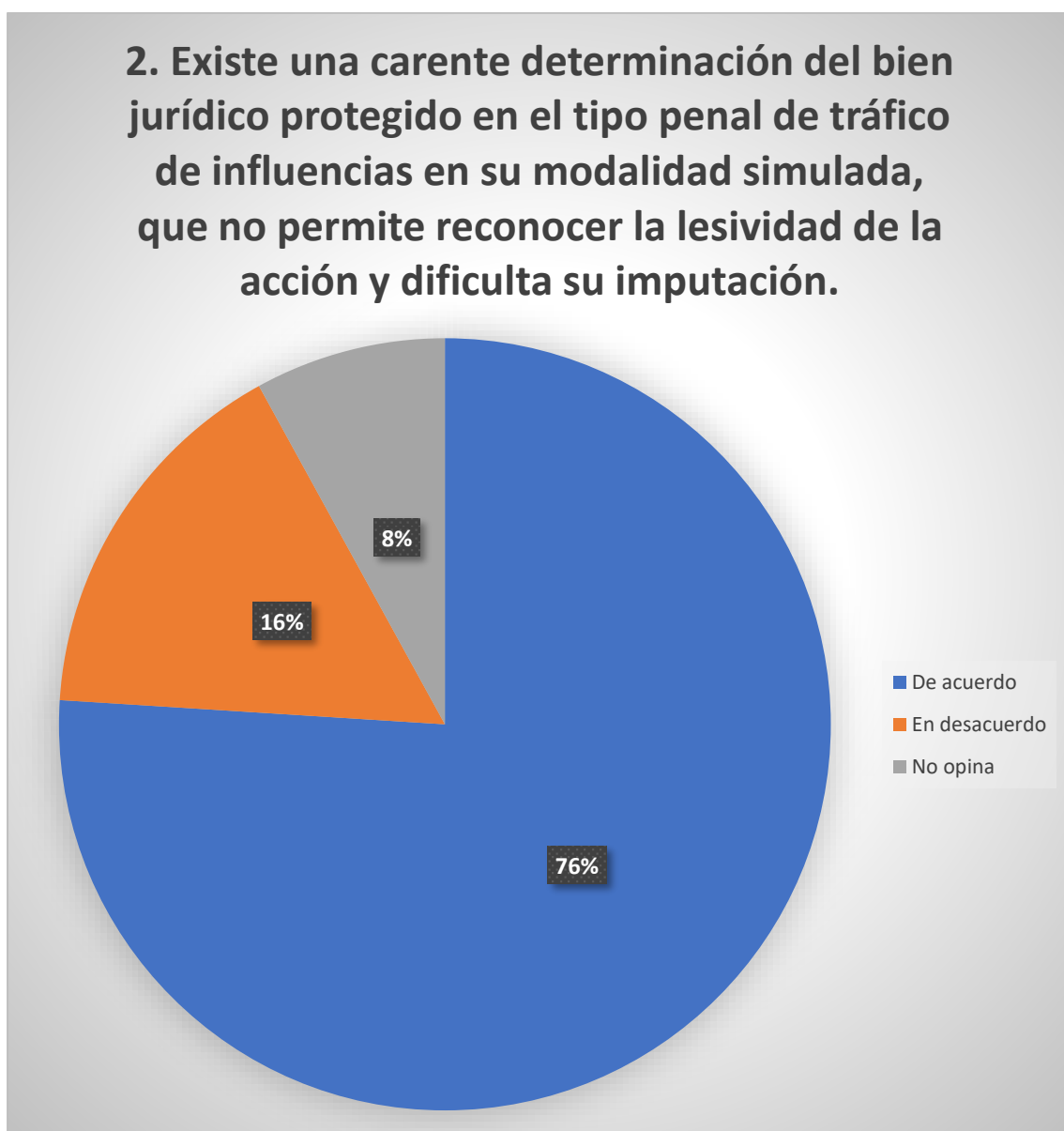
*Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”*

2. Existe una carente determinación del bien jurídico protegido en el tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, que no permite reconocer la lesividad de la acción y dificulta su imputación.

Alternativas	Respuestas
a. De acuerdo	38
b. En desacuerdo	08
c. No opina	04
Total	50



*Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”*



#### **OBSERVACIÓN:**

Tal cual se aprecia del resultado obtenido, se trata de un 76% de expertos que validan la afirmación relacionada con el sentido de protección que se supone establecen los tipos penales mediante el establecimiento o descripción de hechos ilícitos, los mismos que se vinculan con una lesión generada sobre el bien jurídico que se garantiza.

Precisamente esta característica es la que forma parte principal del criterio adoptado por esta investigación, esto es que la correcta administración pública asumida como bien jurídico en el tipo penal analizado, resulta en función al espacio que ocupa en el ordenamiento jurídico, es decir que se encuentra en el grupo de acciones que representan la lesión de la organización estatal en el ámbito de su administración.

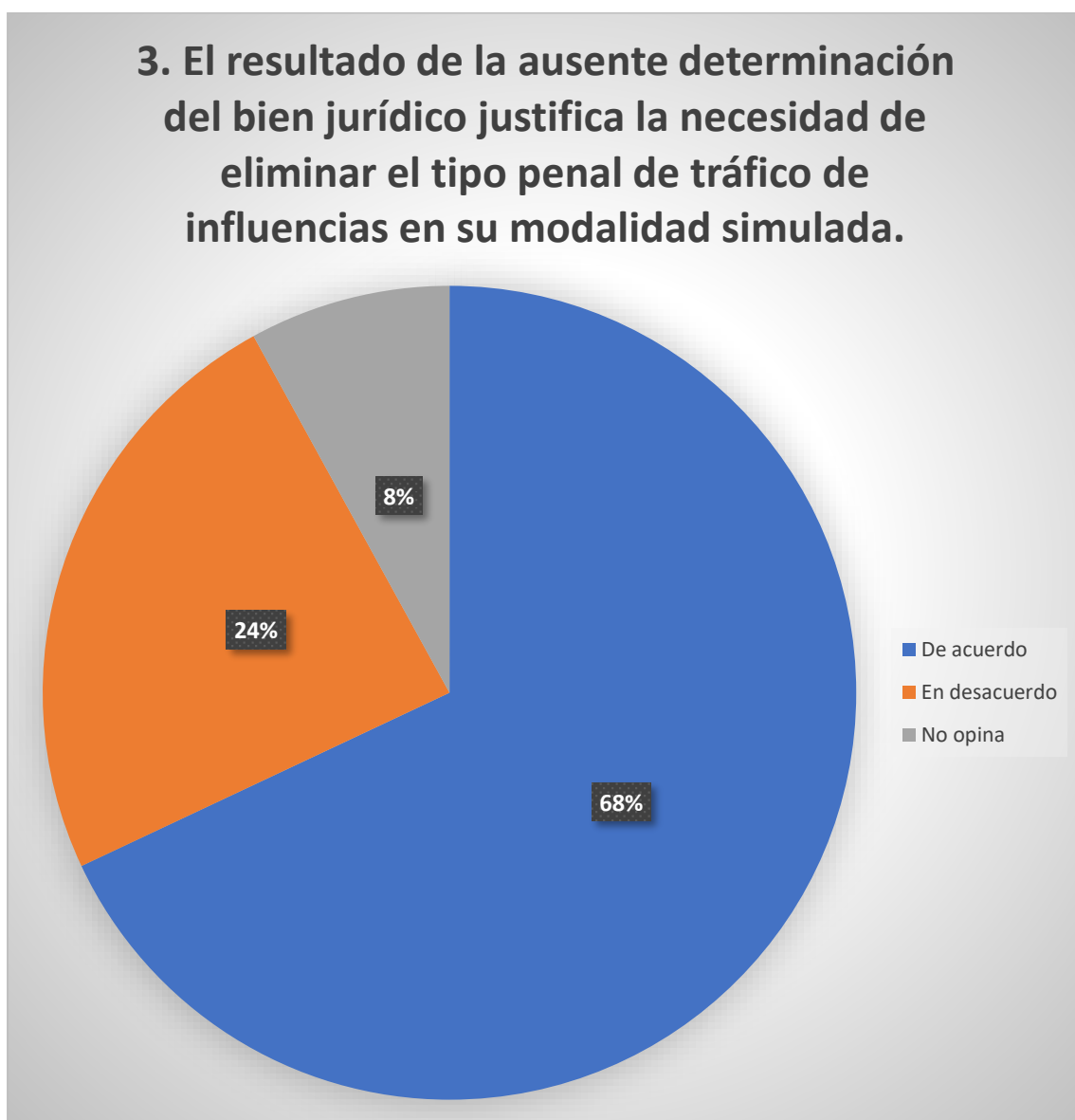
La indicación de este tipo de actos al presumirse como lesivos de la correcta administración pública, no resulta lo suficientemente satisfactoria en tanto que los elementos que se supone deberían contemplar el acto lesivo como perjudicial para el desarrollo de la gestión pública, no resultan ser apreciables de manera objetiva, complicando ello la calificación del hecho ilícito y dificultando además la imputación de este tipo.

*Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”*

3. El resultado de la ausente determinación del bien jurídico justifica la necesidad de eliminar el tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada.

Alternativas	Respuestas
a. De acuerdo	34
b. En desacuerdo	12
c. No opina	04
Total	50

*Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”*



**OBSERVACIÓN:**

Se aprecia un resultado del 68% de quienes apoyan la postura de eliminación del tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, lo cual, pese a no tener una condición amplia de acuerdo, la mayoría si permite validar la afirmación que ha servido para la encuesta ahora planteada. El principal derrotero de este

planteamiento es el hecho de que se estaría dejando libre la posibilidad para ejercer acciones ilícitas en desmedro de las víctimas afectadas por el engaño.

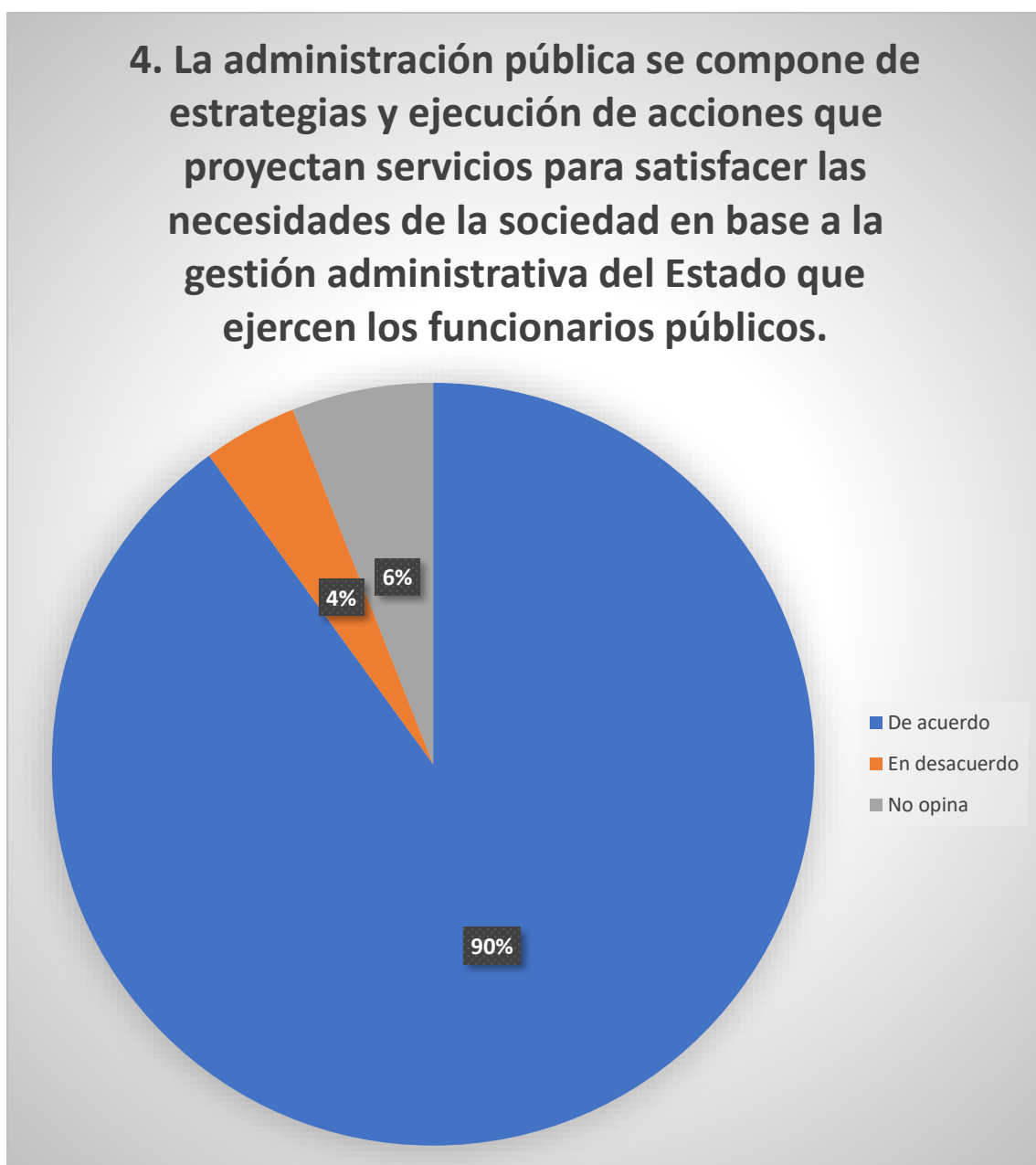
Esta condición de ausencia de lesiones sobre lo que significa la garantía del bien jurídico correcta administración pública, se dirige mas bien a la imposibilidad de establecer el vínculo entre la correcta administración pública y el supuesto o engaño que ha servido de enlace entre el agente y la víctima, no sería posible establecer esta relación y por lo tanto la determinación del daño se verifica en razón un supuesto.

*Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”*

4. La administración pública se compone de estrategias y ejecución de acciones que proyectan servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad en base a la gestión administrativa del Estado que ejercen los funcionarios públicos.

Alternativas	Respuestas
a. De acuerdo	45
b. En desacuerdo	02
c. No opina	03
Total	50

*Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”*



#### **OBSERVACIÓN:**

El resultado que alcanza el 90% de la apreciación de los expertos en derecho permite señalar como validada la afirmación que conceptúa la administración pública, que se muestra como una condición de estrategias destinadas a la ejecución de acciones con fines de protección social y administración del aparato estatal. Esta

característica opera en función a la propia estructura estatal, puesto que se organiza bajo la dependencia o control del propio Estado, así se traslada dicho poder y potestad de control a los propios funcionarios públicos que se ocupan de la ejecución administrativa.

Esta participación de los funcionarios se consolida como la clave para el establecimiento de la condición ilícita de las acciones, lo cual supondría un vínculo directo con la correcta administración, situación que tendría que afectar además la propia ejecución de las estrategias antes mencionadas, eso sí representaría un elemento lesivo sobre las condiciones establecidas para alcanzar la lesividad.

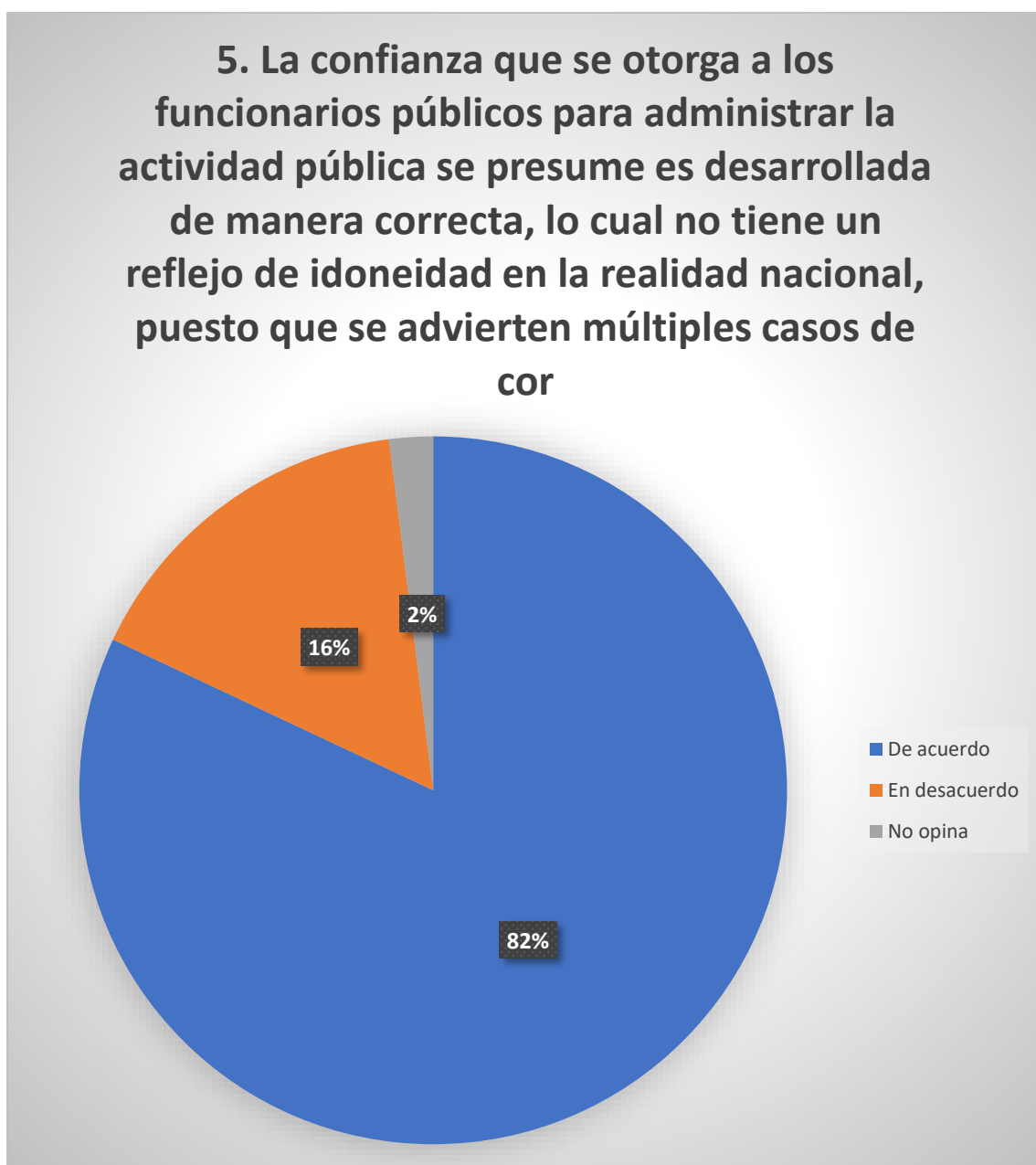


*Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”*

5. La confianza que se otorga a los funcionarios públicos para administrar la actividad pública se presume es desarrollada de manera correcta, lo cual no tiene un reflejo de idoneidad en la realidad nacional, puesto que se advierten múltiples casos de corrupción.

Alternativas	Respuestas
a. De acuerdo	41
b. En desacuerdo	08
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”



**OBSERVACION:**

Tal cual se puede apreciar el sentido de protección establecida por los tipos penales requiere de una correcta verificación del nivel lesivo que se produce con la acción delictiva, es así que se tiene un acercamiento crítico sobre esta condición, lo cual ha sido apreciado por los expertos en el ámbito jurisdiccional, mostrado a través del 82% que se verifica en el resultado de la encuesta.

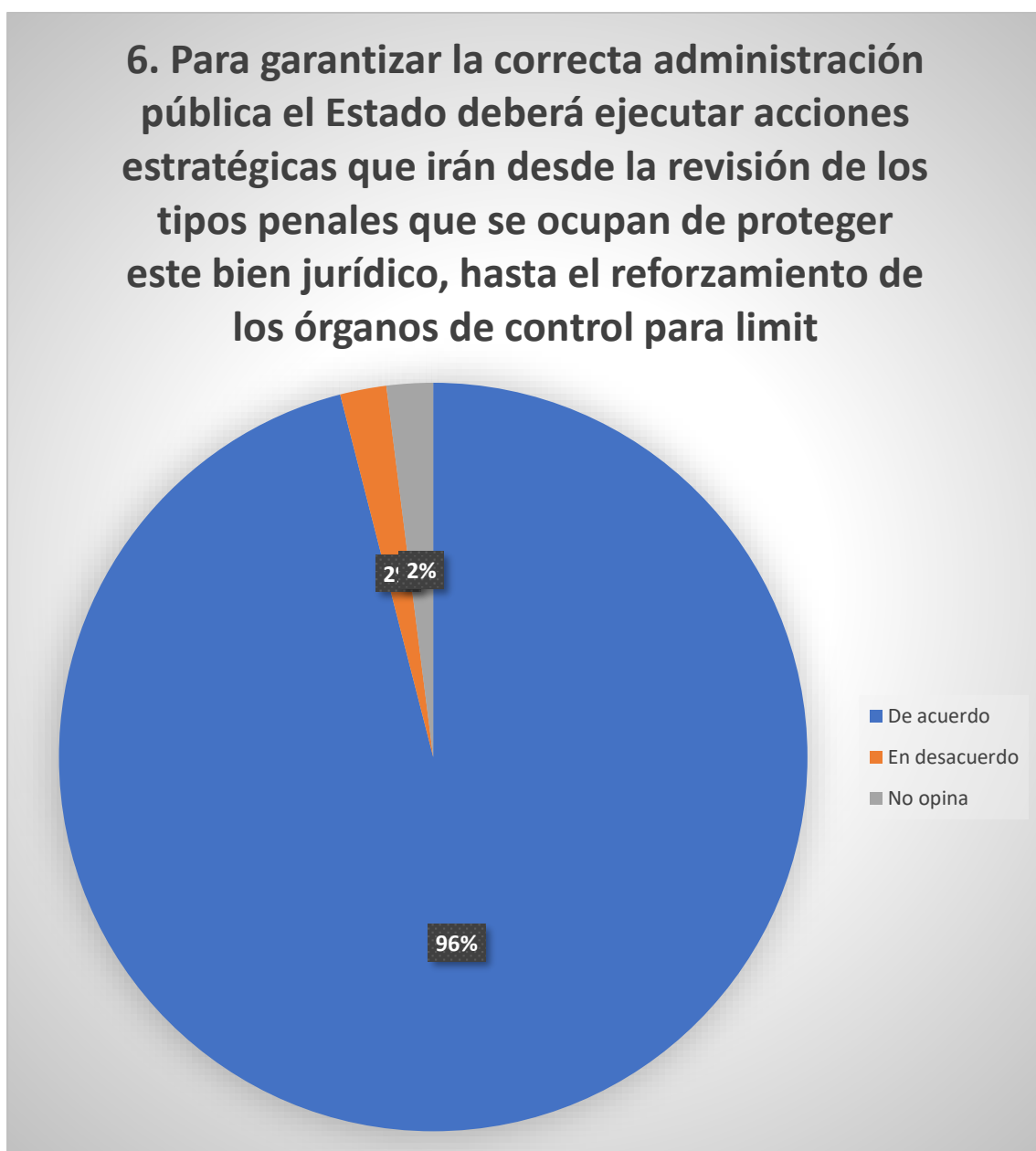
Es así que la condición lesiva dependerá de la existencia de un verdadero carácter de influencia sobre el funcionario, esto sería lo que permita reconocer la existencia del carácter lesivo sobre la correcta administración pública. Esto quiere decir que la alteración de la condición volitiva del funcionario, sobre el cual recae la confianza para administrar el poder que maneja el Estado, sería lo que verdaderamente permita establecer una condición lesiva del acto, justificándose así la condición de lesividad.

*Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”*

6. Para garantizar la correcta administración pública el Estado deberá ejecutar acciones estratégicas que irán desde la revisión de los tipos penales que se ocupan de proteger este bien jurídico, hasta el reforzamiento de los órganos de control para limitar los índices de corrupción.

Alternativas	Respuestas
a. De acuerdo	48
b. En desacuerdo	01
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”



**OBSERVACIÓN:**

El sentido de apreciación que muestran los expertos sobre esta propuesta, alcanza un nivel del 96%, ello se presume en tanto que la correcta administración pública también depende del propio control estatal, vale decir que la misma organización del Estado, debe generar estrategias de revisión, tal cual se establece

en la propuesta de esta afirmación, es el hecho de propiciar una constante evaluación de la realidad que muestra la gestión.

Desde luego esta revisión deberá darse en función a las condiciones de corrupción que puedan reconocerse en el ámbito de la administración pública, lo cual de por sí en la actualidad no requiere una mayor concentración analítica, puesto que basta con verificar la mediatización de este tipo de casos. Esta postura también debe alcanzar a la a veces innecesaria aplicación del Ius Puniendi del Estado, lo que significa un exceso de la intervención punitiva del Estado, puesto que la corrupción de funcionarios no solo depende de la propia conducta de los funcionarios, sino también del rango de permisibilidad que existe en la organización, o la ausencia de un control riguroso.

## **Capítulo V**

### **La contrastación de la hipótesis**

#### **5.1. La discusión de los resultados**

##### **5.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Interpretar doctrinariamente la garantía del bien jurídico y su connotación respecto a la correcta administración pública”**

En lo referente a este objetivo específico se debe discutir en primer lugar los trabajos previos asumen el papel de identificadores de la realidad académica sobre el tema que se presenta como fundamento de esta investigación, así pues el primer trabajo analizado corresponde Cerna (2020), en el cual se alude a la determinación del bien jurídico que se protege en el delito de tráfico de influencias simuladas, refiriendo que debe ser considerado como el prestigio y buen nombre de la administración pública.

Es necesario criticar la postura de este investigador, en tanto que partiendo de la función del ius puniendi estatal debe asumirse su intervención en tanto que se aprecie el vínculo entre determinada acción y su efecto lesivo sobre ciertos objetos o bienes de protección a cargo del propio Estado. Bajo este parámetro jurídico es posible que se ejecuten las acciones persecutorias de los ilícitos desarrollados en el ámbito social, con la finalidad específica de primero reconocer el nivel de responsabilidad penal y en segundo lugar la aplicación de la correspondiente sanción.

La secuencia explicada se basa en el fundamento de protección de bienes jurídicos, los cuales se definen a través de los derechos que se contemplan a nivel constitucional mediante las garantías que ofrece la estructura estatal para su correcta ejecución. Es en base a ellos que se ha construido la estructura normativa penal, puesto que se trasladan los bienes jurídicos que connotan una característica de relevancia que justifique su protección.

Bajo este fundamento, cabe hacer un cuestionamiento sobre la postura de Cerna (2020) ¿Qué justificación normativa ampara la contemplación del prestigio y buen nombre de la administración pública para considerarse como el bien jurídico que se protege en el delito de tráfico de influencias en su modalidad de simuladas? Para tal efecto cabe hacer la búsqueda en el ordenamiento constitucional de aquel derecho que sustente este bien jurídico propuesto.

Si bien es cierto en la normativa constitucional se contempla a la administración pública como un derecho de interés común que el corresponde al Estado garantizar para la satisfacción de la sociedad, que se comporta como un elemento de seguridad jurídica en el desarrollo de la gestión pública. Ello solo estará referido a las pautas que direccionan la ejecución de actividades por parte de los garantes de esta actividad, esto es los funcionarios públicos a quienes se les encomienda velar por esta correcta administración.

La definición del derecho de carácter común en lo que corresponde a los intereses de la sociedad, justifica la protección del bien jurídico correcta administración pública, más en lo que corresponde su prestigio y buen nombre, no



existiría un fundamento puntual en lo que se refiere al derecho ni de carácter particular o general.

De acuerdo a todo lo señalado, se puede indicar que el análisis de este antecedente ha servido de aporte al planteamiento de esta tesis, en tanto que enfoca la observación respecto a la efectividad del tipo penal de tráfico de influencias simuladas en función del bien jurídico que se protege, así el interés interpretativo se orientó hacia la justificación de la intervención del ius puniendi estatal por este tipo de acciones.

Otro de los trabajos previos que se han considerado para reconocer el nivel de estudio académico sobre el tipo penal de tráfico de influencias simuladas, es la investigación de Rodríguez (2018), ¿es correcto dejar sin vigencia el tipo penal de tráfico de influencias simuladas por el solo hecho de que protege la mala fama de la administración pública?

Sobre lo señalado por el autor se puede inferir como el resultado de su análisis, la descripción de un bien jurídico establecido como la mala fama de la administración pública; atendiendo a ello es posible hacer una crítica respecto a dicha concepción, en tanto que la descripción típica del delito en general se orienta hacia la correcta administración pública, como resultado de las acciones idóneas de quienes ostentan la confianza que les otorga el Estado para desarrollar tal actividad.

En tal sentido los funcionarios públicos serán aquellos agentes que serán responsabilizados por el inadecuado manejo de la organización estatal que se les atribuye como facultad en confianza, en tanto que afectan su correcto

funcionamiento. Este criterio obviamente tiene un efecto de lesión sobre un derecho constitucional que se percibe desde la perspectiva de los intereses comunes de la sociedad; ello se traduce en la correcta administración pública en tanto estructura con funciones y fines específicos.

Esta descripción de la administración pública se torna como una condición objetiva de resultados, en tanto que las acciones que desarrollan los funcionarios deben producir eficacia respecto a la administración de dicho esquema para materializar las funciones del estado como son el control del poder y la ejecución de los intereses de la ciudadanía. Estos últimos solo se pueden reconocer dada la construcción de garantías en el ordenamiento constitucional, lo cual inspiran el reconocimiento de los bienes jurídicos a proteger mediante la potestad punitiva del Estado.

Desde tal perspectiva no tendría cabida la concepción de la fama de la administración pública, que no se materializa como un derecho constitucional; tanto es así que la revisión del efecto lesivo no tiene un resultado idóneo que permita establecer un vínculo de responsabilidad. Este análisis alcanza dicho resultado en tanto que se discrepa de la concepción respecto al bien jurídico que se protege con este tipo penal; vale decir que la acción que se describe no tiene un reflejo puntual respecto a un derecho garantizado en el ordenamiento jurídico.

Dicho ello, la postura de Rodríguez (2018), se acepta en cuanto a la propuesta de retirar la vigencia del tipo penal de tráfico de influencias simuladas, pero es criticable en el fondo de su justificación, dado que el problema radica en la

concepción del bien jurídico; entonces, el fundamento correcto no sería la condición lesiva en primera línea sino la interpretación del bien jurídico que se protege en este tipo penal. En tal sentido esta determinación aporta a la tesis ahora desarrollada para revisar el nivel interpretativo que alcanza esta tipología en función a su objeto de protección.

De acuerdo al lineamiento de acción que le corresponde al Estado para ejercer control sobre el desarrollo de las conductas sociales, se precisa de la aplicación de restricciones sobre la libertad de aquellos sujetos que realizan actos reñidos contra el sistema que representa el ordenamiento jurídico, es por ello necesario cuestionar ¿Cuál es el ámbito de protección del derecho penal sobre los bienes jurídicos?

Atendiendo a la percepción sobre la teoría de constitucionalización del derecho penal, se percibe un ámbito de protección que opera respecto de los bienes jurídicos, los mismos que se supone deben ser resguardados en función a las posibles afectaciones que pudieran sufrir a manos de sujetos que alteran el orden jurídico. Tal cuidado que ejerce el derecho penal se da en dos ámbitos, el primero que se vincula con las garantías establecidas constitucionalmente en el ámbito privado de cada sujeto como parte de la sociedad, mientras que en segundo lugar se ubican las garantías relacionadas con el interés público que se asegura en pos de la adecuada conducción del esquema estatal.

De acuerdo a la forma de protección que se evidencia en el ámbito de la legalidad, se debe respetar la intervención del Estado bajo ciertos parámetros establecidos para tal fin, por lo mismo que interesa saber ¿cuáles son los límites que restringen la actividad protectora del derecho penal respecto de los bienes jurídicos?

La concepción doctrinaria del derecho penal respecto a sus funciones tiene como principal límite a dos principios generales, el primero que se orienta en razón de la necesidad de solucionar conflictos en el ámbito social y jurídico, para lo cual se tiene a la ultima ratio como el indicador de este límite, en tanto el Estado para alcanzar eficacia en la resolución de las dificultades sociales deberá aplicar mecanismos previos a la intervención del derecho penal, convirtiéndose éste último en una medida de acción final en tanto ya no existan posibilidades de solución al haberse agotado los otros medios de la acción estatal.

El segundo de los límites comprendidos para la acción protectora respecto de los bienes jurídicos se inspira en la condición de efectos que el derecho penal pudiera producir en la realidad social y personal con respecto a la aplicación de sanciones que producen afectación de los derechos fundamentales, es así que participa el principio de la mínima intervención, condicionando la clasificación adecuada de los bienes jurídicos en razón del nivel lesivo que se ejecuta sobre ellos.

De acuerdo al sentido de control que opera en las funciones estatales respecto a las incidencias delictivas, conviene preguntar si ¿existe la posibilidad de limitar la acción interventora del Estado sobre la protección del bien jurídico correcta administración pública?

La configuración de los tipos penales en el ordenamiento jurídico penal, constituye un esquema descriptivo de las conductas que llegan a representar delitos en función a las lesiones que se producen sobre los bienes jurídicos; tal cual se ha señalado, el reconocimiento de estos requiere de la verificación de cuan necesaria es la intervención del derecho penal para solventar la garantía de ejecución de tales derechos.

Se requiere entonces, que la lesión pueda ser percibida desde el razonamiento jurídico, en tanto lesión que afecta materialmente un bien o pone en riesgo latente la ejecución de un derecho. Siendo así el caso del bien jurídico correcta administración pública, implica un resultado de las funciones que le corresponden al Estado para alcanzar el equilibrio entre lo que garantiza la estructura estatal y lo que se percibe por parte de la sociedad, ello depende de elementos que intervienen para lograr tal objetivo, como es el caso de los funcionarios públicos que se ocupan de la materialización de dichas funciones, y de otro lado la función controladora del propio Estado para asegurar el beneficio del interés público que supone la correcta administración para otorgar el servicio público que se destina como labor principal de tal administración.

Sobre tal esquema se precisa el reconocimiento de afectación jurídica con el fin de poder establecer el nivel lesivo de la acción delictiva, por lo mismo que existirán restricciones para la intervención del ius puniendi, lo cual debe ser revisado de manera puntual en la construcción de los tipos penales relacionados con esta actividad, ello en tanto que se constituye como el origen de tal intervención, a fin de verificar si corresponde de manera adecuada el control que ejerce el Estado sobre la configuración del daño sobre su estructura.

### **TOMA DE POSTURA**

Es así que se puede concluir del análisis del delito de tráfico de influencias que la razón de sancionar es porque su conducta lesionaría o pondría en peligro el bien jurídico denominado administración pública. Es así que en su modalidad concreta o real; se puede advertir que dicha tipificación si cumple con esa finalidad protectora que tiene el derecho penal, esto es, de prevenir y sancionar ciertas conductas. Sin embargo, ello no sucede con la modalidad simulada porque no se

verifica en el plano concreto ni jurídico la lesión ni puesta en peligro de ningún bien jurídico. Asimismo, no resulta lógico mantener dicha estructura legal, puesto que de su interpretación teleológica no condice con lo que realmente sucede. Ante eso, del texto legal analizado y frente a la inexistencia de una persona que pueda provocar afectación de algún tipo al orden jurídico o a algún bien jurídico hace que dicha tipificación atente contra el principio de lesividad en primer lugar, afecta al principio de proporcionalidad dado que equiparar esa conducta con la modalidad simulada en el sentido de penar por igual ambas modalidades hace que sea absurdo y desproporcional. Por otro lado, no cumple con el principio de ultima ratio ni fragmentariedad porque no se está usando al derecho penal como un medio de control social adecuado para conductas que pongan en riesgo a la sociedad ni está seleccionando correctamente las conductas más lesivas.

#### **5.1.2. Discusión del objetivo específico: Observar el sentido normativo del tráfico de influencias en su modalidad simulada de acuerdo al control de los principios generales del derecho**

De acuerdo a la concepción jurídica que debe apreciarse en toda incorporación al ordenamiento legislativo, se precisa de la intervención de fundamentos que justifiquen su existencia, en tanto figuras jurídicas de trascendencia como lo son los tipos penales contenidos en el catálogo sustantivo del derecho penal peruano. Esta indicación conlleva al análisis de un tipo penal en específico que es el tráfico de influencias simulada, descripción normativa que señala condiciones de ejecución que no necesariamente se ajustan a un resultado

lesivo con el efecto suficiente para considerar una necesidad el tipo de sanción que se aplica.

Para efectos del análisis interpretativo desde el sentido sistemático respecto a la participación de este tipo penal, conviene cuestionar si acaso ¿La sanción de la modalidad simulada cumple con la consecuencia del principio de lesividad?, atendiendo al indicador que observa este principio, se puede señalar que el perjuicio ocasionado por una determinada acción deberá ser pasible de medición, esto es que su característica sea apreciable por la razón humana, vale decir que se presente como una identidad en el ámbito de la realidad que corresponde al bien que se afecta.

De acuerdo a lo señalado, la existencia de una lesión conlleva a la aplicación del reproche social que tiene por función el control estatal sobre las acciones que rebasan la esfera de protección de ciertos derechos, que como se ha explicado en el ámbito de protección sobre los bienes jurídicos, deberá tener un efecto lesivo sobre el interés personal directo o respecto a intereses públicos. Para lograr tal objetivo de control se tiene como herramienta jurídica al principio de lesividad que como tal procura un sendero de optimización en la forma en que se aplica el derecho y así mismo la condición del origen de las reglas; en tal sentido, la construcción de la regla típica que describe al tráfico de influencias simuladas tendrá que superar el condicionamiento de la lesión directa sobre el bien que se protege.

Conforme se aprecia, es posible señalar que, el control que supone este principio debe ser orientado hacia los efectos lesivos, por lo mismo que no se logra superar de modo efectivo el nivel de perjuicio que ocasiona la acción descrita como simulación de las influencias que se ofrecen a cambio de un beneficio, ello en tanto que el efecto de las condiciones generales no se alcanza a concretizar de manera

adecuada. Partiendo de ello se asume que no existe coincidencia de control de este principio respecto al tipo estudiado.

Tal cual se ha señalado, en función al control del principio de lesividad, el fundamento del tráfico de influencias simuladas se orienta a concepciones lesivas que salen del contexto penal, por lo mismo que interesa saber ¿Cómo controla la última ratio la configuración típica del tráfico simulado de influencias?, la dimensión de control que supone la intervención del derecho penal debe asumirse en base a límites, tal cual lo señala el principio de última ratio, que se convierte en uno de tipo de opción para limitar las acciones estatales en base a la aplicación del ius puniendi estatal, teniendo en cuenta la existencia de otras posibilidades de solución de los conflictos.

El nivel de control que supone este principio procura describir la existencia de posibilidades de acción estatal a fin de solucionar los conflictos generados en el ámbito social mediante otras alternativas que supongan la restricción de derechos tan importantes como el de la libertad personal. Del análisis de esta situación jurídica también se puede apreciar la ausencia de justificación jurídica válida para la incorporación de este tipo penal al ordenamiento jurídico, ello en tanto que la acción descrita en el tipo penal puede ser absorbida por una intervención de control administrativo, que resulta menos restrictiva y que puede ser más eficaz en sus resultados.

La concurrencia de los principios generales antes descritos advierte la necesidad de establecer marcadores de acción punitiva, así es como se determinan los segmentos de protección, esto quiere decir que la existencia de una estructura diseñada en función a los bienes jurídicos que se protegen, convocan a la participación de ciertas conductas que superan el nivel de protección que otorga el



sistema jurídico. Vale decir que con respecto al principio de fragmentariedad deberá superarse este nivel lesivo, pero en función a los intereses que supone el mismo bien jurídico que se protege en un nivel gravoso considerable.

De acuerdo a ello, el condicionamiento legislativo debe operar en razón de las circunstancias mas graves que se acoplen a un tipo de protección, esto es condiciones de gravedad, aún cuando se encuentre vinculación entre la venta de influencias con el sistema de administración pública, ello no justifica la intervención del Estado para sancionar, en tanto que la afectación respecto del bien que se protege, esto es la correcta administración pública no sufre ninguna alteración.

#### TOMA DE POSTURA

De lo expuesto anteriormente, se deduce que en el plano real, el delito de tráfico de influencias en su modalidad simulada, no merece ninguna sanción penal, es decir, el Estado no debe intervenir mediante la aplicación del ius puniendi dado que no existe una afectación a un bien jurídico penalmente relevante. Se expresa ello porque en aplicación del principio de última ratio, existirían otras alternativas en las que se puedan sancionar dichas conductas ilegales, como por ejemplo el derecho administrativo. Asimismo, los supuestos bienes jurídicos que se pretenden tutelar en este delito no guardan correspondencia con lo constitucional ni lo penal.

Queda claro que lo planteado a nivel legislativo no tiene una afectación gravosa y que por tanto debiera ser aplicable el principio de lesividad, toda vez que dicha modalidad no tutela bien jurídico relevante, razón por la cual tampoco debería estar reconocido a nivel legal dado que la mala técnica legislativa determinará en

muchos casos la privación de libertad de personas que en la realidad no afectaron bien jurídico relevante.

Es así que se puede concluir del análisis del delito de tráfico de influencias es que la razón de sancionar es porque su conducta lesionaría o pondría en peligro el bien jurídico denominado administración pública. Es así que en su modalidad concreta o real podemos advertir que dicha tipificación si cumple con esa finalidad protectora que tiene el derecho penal, esto es, de prevenir y sancionar ciertas conductas. Sin embargo, ello no sucede con la modalidad simulada porque no se verifica en el plano concreto ni jurídico la lesión ni puesta en peligro de ningún bien jurídico. Asimismo, no resulta lógico mantener dicha estructura legal, puesto que de su interpretación teleológica no condice con lo que realmente sucede. Ante eso, del texto legal analizado y ante la inexistencia de una persona que pueda provocar afectación de algún tipo al orden jurídico o a algún bien jurídico hace que dicha tipificación atente contra el principio de lesividad en primer lugar, afecta al principio de proporcionalidad dado que equiparar esa conducta con la modalidad en el sentido de penar por igual ambas modalidades hace que sea absurdo y desproporcional. Por otro lado no cumple con el principio de ultima ratio ni fragmentariedad porque no se está usando al derecho penal como un medio de control social adecuado para conductas que pongan en riesgo a la sociedad ni está seleccionando correctamente las conductas más lesivas.

**5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar el criterio interpretativo respecto a la sanción del tráfico de influencias simuladas mediante la jurisprudencia”**

¿Qué fundamentos motiva la construcción jurídica del criterio para reconocer y atribuir la responsabilidad penal respecto al tráfico de influencias simuladas?

Teniendo en cuenta que los criterios jurídicos se forman en base a tres ámbitos de análisis, siendo el primero el relacionado con el aspecto normativo, esto es lo que corresponde a la regla, que para este caso sería el artículo 400 del Código Penal, el mismo que diseña una estructura típica que vincula una acción de ofrecimiento como ilícita; además de ello se encuentra el ámbito de análisis relacionado con la interpretación que se obtiene de la jurisprudencia en función al planteamiento sobre la manera en se habrá de subsumir el tipo penal hacia la realidad observada; siendo así el último ámbito de análisis para establecer el criterio jurídico será aquel orientado por la máxima de la experiencia de quien haya de optar por una decisión jurídica.

En razón a ello se ha realizado la selección especial de dos ámbitos jurisprudenciales en los que se aprecia una postura distinta respecto al criterio interpretativo que se entiende habrá de influenciar en el criterio jurídico que adopte aquel juzgador que tomará la decisión en cada caso en particular, tal cual se ha indicado en el párrafo anterior; ámbitos sopesados entre el máximo intérprete de la Constitución y la entidad suprema del sistema de justicia.

El resultado de la evaluación de estos criterios jurídicos jurisprudenciales ha permitido reconocer una postura dispar, esto es que tanto el Tribunal Constitucional así como la Corte Suprema adoptan posturas contrarias respecto a la aplicación del tipo penal contenido en el artículo 400 del ordenamiento penal sustantivo; vale decir que en el caso de la necesidad de tomar el vínculo interpretativo de estos órganos para resolver casos en la judicatura, se tendría un disvalor en el sentido que se hubiera de adoptar. Sin duda alguna el resultado de esta confrontación de posturas será la falta de uniformidad de criterios al momento de resolver cada caso en particular, lo que se traduce en un tema de falta de predictibilidad del sistema de justicia.

#### TOMA DE POSTURA:

De acuerdo al resultado obtenido al analizar el criterio interpretativo respecto a la sanción del tráfico de influencias simuladas mediante la jurisprudencia, se percibe de esta realidad un sentido ambivalente como resultado de la interpretación en tanto que por un lado se admite la existencia de justificaciones respecto al tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, mientras que por otro lado se percibe un criterio interpretativo de prevalencia del esquema normativo que contempla a la condición simulada a fin de garantizar la correcta administración pública. Tal resultado genera inseguridad jurídica dada la ausencia de predictibilidad que genera con su influencia interpretativa.

## **5.2. La validación de las variables**

### **5.2.1. Validación sobre la variable independiente “El tráfico de influencias en su modalidad simulada”**

Se debe recalcar que la variable independiente ha tenido como función conceptualizar el origen del problema planteado en la investigación, ello en tanto que se percibe a la tipificación del delito de tráfico de influencias en su modalidad simulada como una estructura carente de coincidencia con el bien jurídico correcta administración pública, lo cual se pretende discutir en la investigación, y que como resultado de ello se tiene que dicha tipología no merece ninguna sanción penal, es decir, el Estado no debe intervenir mediante la aplicación del ius puniendi dado que no existe una afectación a un bien jurídico penalmente relevante.

Esta postura es reforzada en tanto que la viabilidad jurídica para establecer la descripción de acciones delictivas en los tipos penales requiere de haber superado condiciones principistas como la referida a la última ratio; puesto que para casos especiales como el tratado mediante la simulación de influencias, existirían otras alternativas en las que se puedan sancionar dichas conductas ilegales, como por ejemplo el derecho administrativo. Asimismo, los supuestos bienes jurídicos que se pretenden tutelar en este delito no guardan correspondencia con lo constitucional ni lo penal.

Queda claro que lo planteado a nivel legislativo no tiene una afectación gravosa y que por tanto debiera ser aplicable el principio de lesividad, toda vez que dicha modalidad no tutela bien jurídico relevante, razón por la cual tampoco debería estar reconocido a nivel legal dado que la mala técnica legislativa determinará en

muchos casos la privación de libertad de personas que en la realidad no afectaron bien jurídico relevante.

La condición especial de esta simulación de la influencia es que representa un supuesto que no se verifica en el plano concreto ni jurídico, dado que no se produce la lesión ni puesta en peligro de ningún bien jurídico. Asimismo, no resulta lógico mantener dicha estructura legal, puesto que de su interpretación teleológica no condice con lo que realmente sucede.

La construcción típica en la que se advierten estas condiciones que no superan las reglas previas para la descripción de conductas como ilícitas y pasibles de sanción en el ordenamiento jurídico, acarrea la necesidad de interpretación, la misma que presenta en la realidad un sentido ambivalente como resultado pues se admite la existencia de justificaciones respecto al tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, mientras que por otro lado se percibe un criterio interpretativo de prevalencia del esquema normativo que contempla a la condición simulada a fin de garantizar la correcta administración pública. Tal resultado genera inseguridad jurídica dada la ausencia de predictibilidad que genera con su influencia interpretativa.

En función a todos los aspectos señalados, es posible establecer como validación de la variable independiente, lo siguiente:

**El tráfico de influencias en su modalidad simulada no cumple con el nivel de lesividad para ocupar una sanción penal.**

### **5.2.2. Validación sobre la variable dependiente: “La garantía del bien jurídico correcta administración pública”**

Debe dejarse en claro la función de esta variable dependiente que se ha ocupado de conceptualizar la figura que recibe el efecto de aquel origen del problema identificado en la variable independiente, lo cual se muestra desde la perspectiva que describe el bien jurídico como tal. De acuerdo a ello se verifica teóricamente que para el tráfico de influencias la razón de sancionar es porque su conducta lesionaría o pondría en peligro el bien jurídico denominado administración pública. Sin embargo, ello no sucede con la modalidad simulada porque no se verifica en el plano concreto ni jurídico la lesión ni puesta en peligro de ningún bien jurídico. Asimismo, no resulta lógico mantener dicha estructura legal, puesto que de su interpretación teleológica no condice con lo que realmente sucede; dicha tipificación atenta contra el principio de lesividad en primer lugar, afecta al principio de proporcionalidad; por otro lado, no cumple con el principio de ultima ratio ni fragmentariedad.

Según lo señalado es posible advertir como validación de la variable dependiente a la siguiente afirmación:

**La garantía del bien jurídico correcta administración pública mantiene el equilibrio de la organización estatal.**

### 5.3. Contrastación de la hipótesis

#### Determinación final

**El tráfico de influencias en su modalidad simulada no cumple con el nivel de lesividad para ocupar una sanción penal, esto es porque no afecta la garantía del bien jurídico correcta administración pública que es mantener el equilibrio de la organización estatal.**

*Tabla 7: Contrastación de la hipótesis*

Hipótesis inicial	Determinación final
Si, el tráfico de influencias en su modalidad simulada no afecta de manera lesiva la garantía del bien jurídico correcta administración pública; entonces se deberá considerar la despenalización de esta acción.	El tráfico de influencias en su modalidad simulada no cumple con el nivel de lesividad para ocupar una sanción penal, esto es porque no afecta la garantía del bien jurídico correcta administración pública que es mantener el equilibrio de la organización estatal.



## **Conclusiones**

### **Conclusión general**

Se determina que el tráfico de influencias en su modalidad simulada no cumple con el nivel de lesividad para ocupar una sanción penal, esto es porque no afecta la garantía del bien jurídico correcta administración pública que es mantener el equilibrio de la organización estatal

### **Conclusiones específicas**

#### **Primera**

Se concluye en base a la interpretación doctrinaria de la garantía del bien jurídico y su connotación respecto a la correcta administración pública, tomando como ejemplo al delito de tráfico de influencias, que la razón de sancionar es porque su conducta lesionaría o pondría en peligro el bien jurídico denominado administración pública. Es así que en su modalidad concreta o real; se puede advertir que dicha tipificación si cumple con esa finalidad protectora que tiene el derecho penal, esto es, de prevenir y sancionar ciertas conductas; toda vez que el efecto idóneo de la función pública será aquello que justifica la garantía, ante cuya lesión se faculta al Ius puniendi para intervenir.

#### **Segunda**

Se ha llegado a concluir en base al sentido normativo del tráfico de influencias en su modalidad simulada de acuerdo al control de los principios generales del derecho, que esta acción ilícita no merece ninguna sanción penal; es decir, el Estado no debe intervenir mediante la aplicación del ius puniendi dado que no existe una afectación a un bien jurídico penalmente relevante. Se expresa ello porque en aplicación del principio de última ratio, existirían otras alternativas en

las que se puedan sancionar dichas conductas ilegales; además, la ausencia de una afectación gravosa sugiere la intervención del principio de lesividad.

### Tercera

Se ha llegado a concluir en base al criterio interpretativo respecto a la sanción del tráfico de influencias simuladas mediante la jurisprudencia, que por un lado se admite la existencia de justificaciones respecto al tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, mientras que por otro lado se percibe un criterio interpretativo de prevalencia del esquema normativo que contempla a la condición simulada a fin de garantizar la correcta administración pública. Tal resultado genera inseguridad jurídica dada la ausencia de predictibilidad que genera con su influencia interpretativa.

## **Recomendaciones**

Primera:

Se recomienda al Congreso de la República la evaluación de la realidad planteada en esta investigación para que en función a los resultados de incongruencia entre el bien jurídico protegido en el tráfico influencias y el verdadero resultado de la modalidad simulada que se tipifica en el artículo 400 del Código Penal, se plantee un proyecto de Ley para restringir la acción penal que no supera la condición del principio de ultima ratio de la intervención punitiva del Estado.

Segunda:

Se sugiere que el cambio normativo que se plantea en función a la necesidad de corregir el impulso punitivo del Estado, sobre la modalidad simulada que describe el tráfico de influencias, deba tener como resultado la omisión del término simuladas en la estructura del artículo 400 del Código Penal.

## **Bibliografía**

Cerna Camones, D. T. (2020). *El delito de tráfico de influencias: legitimación del acto simulado a partir de la configuración del bien jurídico protegido.*

Lima: Universidad San Martín de Porres. Obtenido de [https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/6958/cerna\\_cdt.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/6958/cerna_cdt.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

Chanjan, R., Puchuri, F., Hinojosa, S., Villalobos, R., Gutierrez, A., & Cueva, J.

(2020). El delito de tráfico de influencias y el tratamiento del elemento caso judicial o administrativo. *Derecho y Sociedad*, II(54), 275-291. Obtenido de <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ba442c159a422f6aJmltdHM9MTY2NTYxOTIwMCZpZ3VpZD0zZDI4NWM0Yy01ODJkLTkyNDgtMjNiYS01MjAwNTkzOTYzMTQmaW5zaWQ9NTI2OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=3d285c4c-582d-6248-23ba-520059396314&psq=traficoi+de+influencias+penal+peru+revista+pdf&u=a1aHR>

Cugat Mauri, M. (2014). El tráfico de influencias. Un tipo prescindible. *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*(16), 5.26.

Ferrajoli, L. (2012). El principio de lesividad como garantía penal. *Revista Nuevo Foro Penal*, VIII(79), 109-11.

Hurtado Pozo, J., & Prado Saldarriaga, V. (2011). *Manual de Derecho Penal Parte General*. Lima: Idemsa.

Jescheck, H., & Weigend, T. (2014). *Tratado de derecho penal. Parte general*. Lima: Instituto Pacífico.

Landa, C. (2013). La constitucionalización del derecho peruano. *Revista de Derecho PUCP*, 14.

Luzón Peña, D. M. (2016). *Lecciones de Derecho Penal Parte General* (Tercera ed.). Madrid: Tirant Lo Blanch.

- Mir Puig, C. (2005). *Los delitos contra la administración pública en el nuevo Código Penal*. Barcelona: Bosch.
- Rodríguez Paucar, C. A. (2018). *Estudio dogmático y propuesta para la despenalización del tráfico de influencias en su modalidad simulada: (Huacho-2016)*. Huacho: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Obtenido de [http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/1448/TFDyCP\\_01\\_21.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/1448/TFDyCP_01_21.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Salinas Siccha, R. (2016). *Delitos contra la administración pública* (Tercera ed.). Lima: Grijley.
- Tribunal Constitucional, Exp. N° 012-2006-AI/TC (Tribunal Constitucional 2006).
- Valverde Cancinos, W. F. (2017). *Estudios sobre la evolución doctrinaria y legislativa del delito de tráfico de influencias*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/41034/1/T38328.pdf>
- Villarroel, C. (2017). *El bien jurídico protegido por el delito de trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano*. Lima: PUCP. Obtenido de [https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9736/Villarroel\\_Quinde\\_Bien\\_jur%c3%addico\\_protegido1.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9736/Villarroel_Quinde_Bien_jur%c3%addico_protegido1.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Villavicencio, F. (2006). *Derecho Penal Parte General*. Lima: Grijley.

## **Anexos**

### **1. Formato de evaluación de expertos**

Tesis: “El tráfico de influencias en su modalidad simulada como afectación de la garantía del bien jurídico correcta administración pública”

I. Variable Independiente: “El tráfico de influencias en su modalidad simulada”

1. El tráfico de influencias en su modalidad simulada supone la acción delictiva en razón de un pacto sobre la influencia de un funcionario público inexistente.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina
2. Existe una carente determinación del bien jurídico protegido en el tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, que no permite reconocer la lesividad de la acción y dificulta su imputación.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina
3. El resultado de la ausente determinación del bien jurídico justifica la necesidad de eliminar el tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

II. Variable dependiente: “La garantía del bien jurídico correcta administración pública”

4. La administración pública se compone de estrategias y ejecución de acciones que proyectan servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad en base a la gestión administrativa del Estado que ejercen los funcionarios públicos.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

5. La confianza que se otorga a los funcionarios públicos para administrar la actividad pública se presume es desarrollada de manera correcta, lo cual no tiene un reflejo de idoneidad en la realidad nacional, puesto que se advierten múltiples casos de corrupción.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

6. Para garantizar la correcta administración pública el Estado deberá ejecutar acciones estratégicas que irán desde la revisión

de los tipos penales que se ocupan de proteger este bien jurídico, hasta el reforzamiento de los órganos de control para limitar los índices de corrupción.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

Link de la encuesta:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1FulZoVd3vWz3k1i\\_YXi\\_o7h-t32FJzu36yxxSLkzBBH4Vw/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1FulZoVd3vWz3k1i_YXi_o7h-t32FJzu36yxxSLkzBBH4Vw/viewform?usp=sf_link)



## Resultados de la encuesta

*Tabla 8: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”*

1. El tráfico de influencias en su modalidad simulada supone la acción delictiva en razón de un pacto sobre la influencia de un funcionario público inexistente.

Alternativas	Respuestas
d. De acuerdo	40
e. En desacuerdo	04
f. No opina	06
Total	50

Ilustración 7: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”



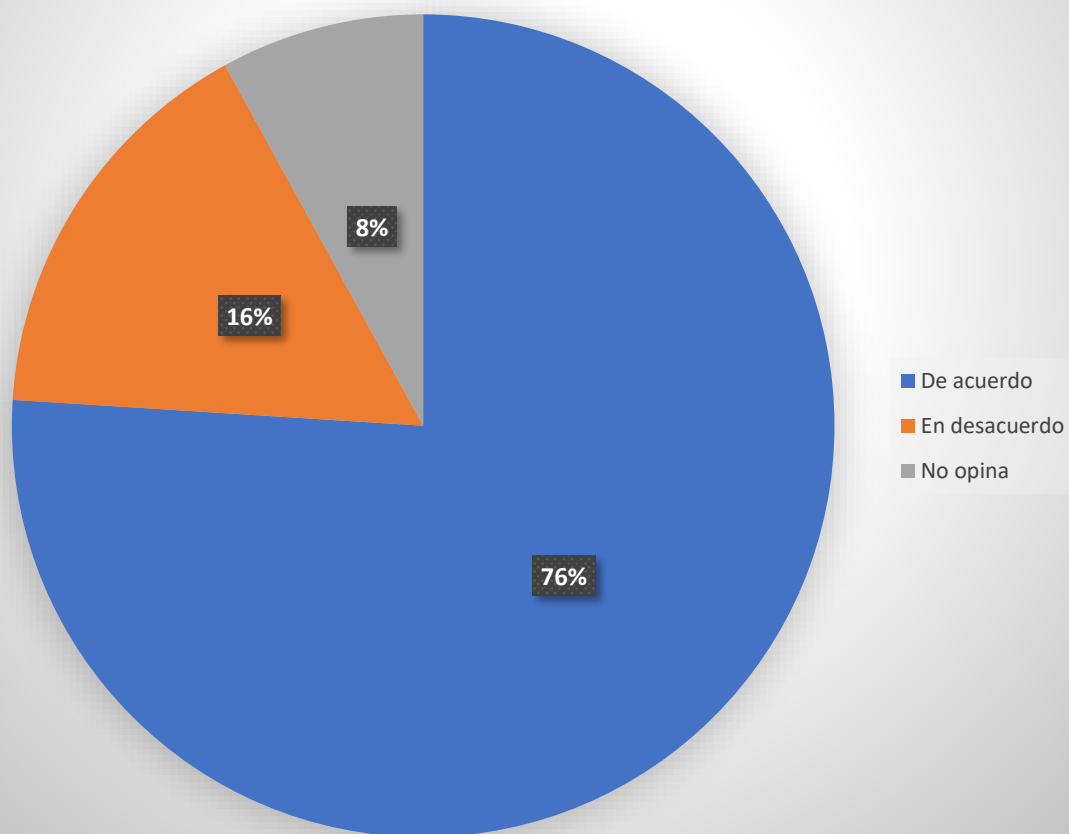
*Tabla 9: "Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2"*

2. Existe una carente determinación del bien jurídico protegido en el tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, que no permite reconocer la lesividad de la acción y dificulta su imputación.

Alternativas	Respuestas
d. De acuerdo	38
e. En desacuerdo	08
f. No opina	04
Total	50

*Ilustración 8: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”*

**2. Existe una carente determinación del bien jurídico protegido en el tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada, que no permite reconocer la lesividad de la acción y dificulta su imputación.**

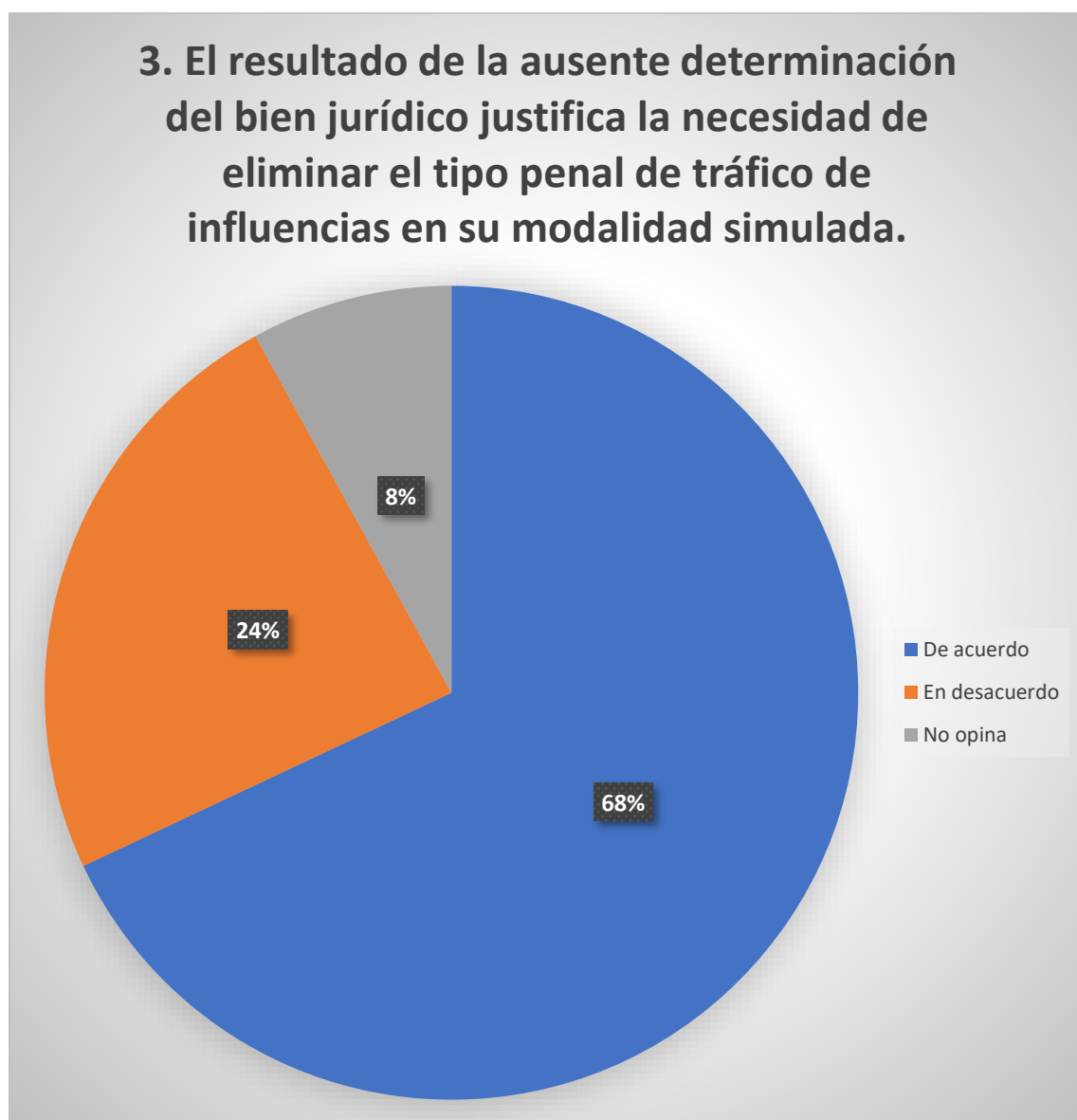


*Tabla 10: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”*

3. El resultado de la ausente determinación del bien jurídico justifica la necesidad de eliminar el tipo penal de tráfico de influencias en su modalidad simulada.

Alternativas	Respuestas
d. De acuerdo	34
e. En desacuerdo	12
f. No opina	04
Total	50

Ilustración 9: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”



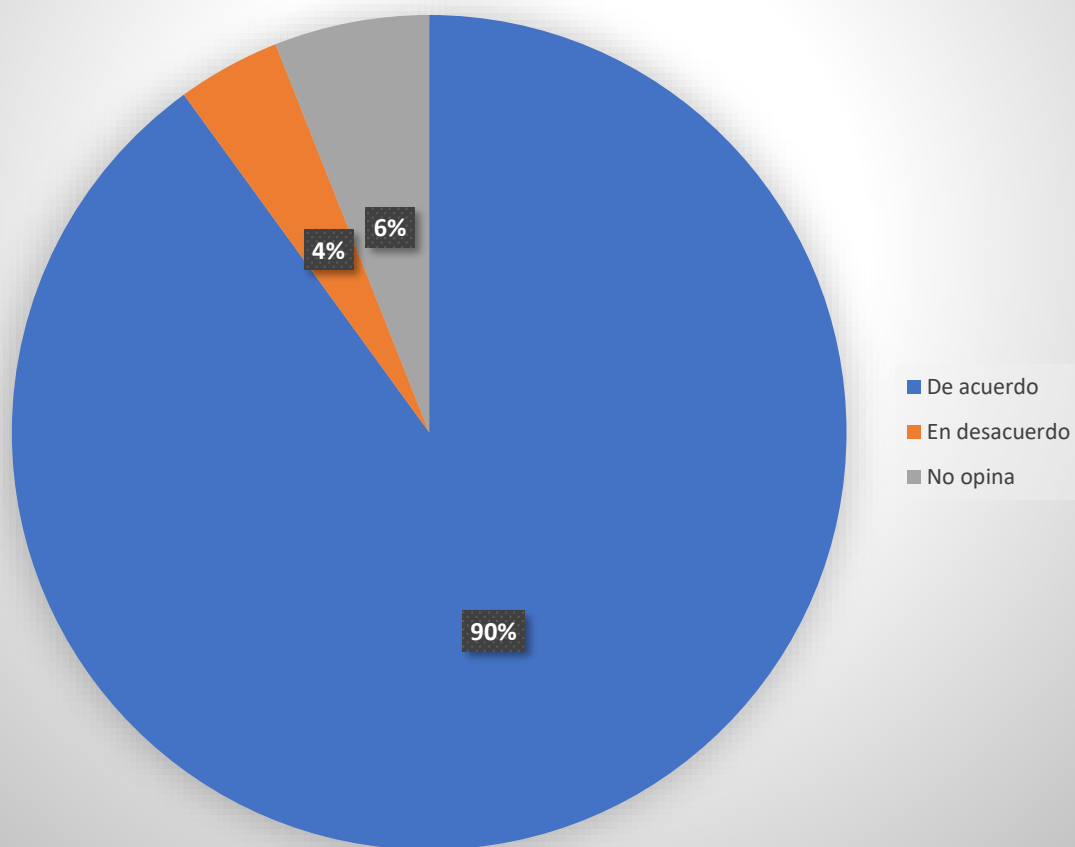
*Tabla 11: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”*

4. La administración pública se compone de estrategias y ejecución de acciones que proyectan servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad en base a la gestión administrativa del Estado que ejercen los funcionarios públicos.

Alternativas	Respuestas
d. De acuerdo	45
e. En desacuerdo	02
f. No opina	03
Total	50

Ilustración 10: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”

**4. La administración pública se compone de estrategias y ejecución de acciones que proyectan servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad en base a la gestión administrativa del Estado que ejercen los funcionarios públicos.**



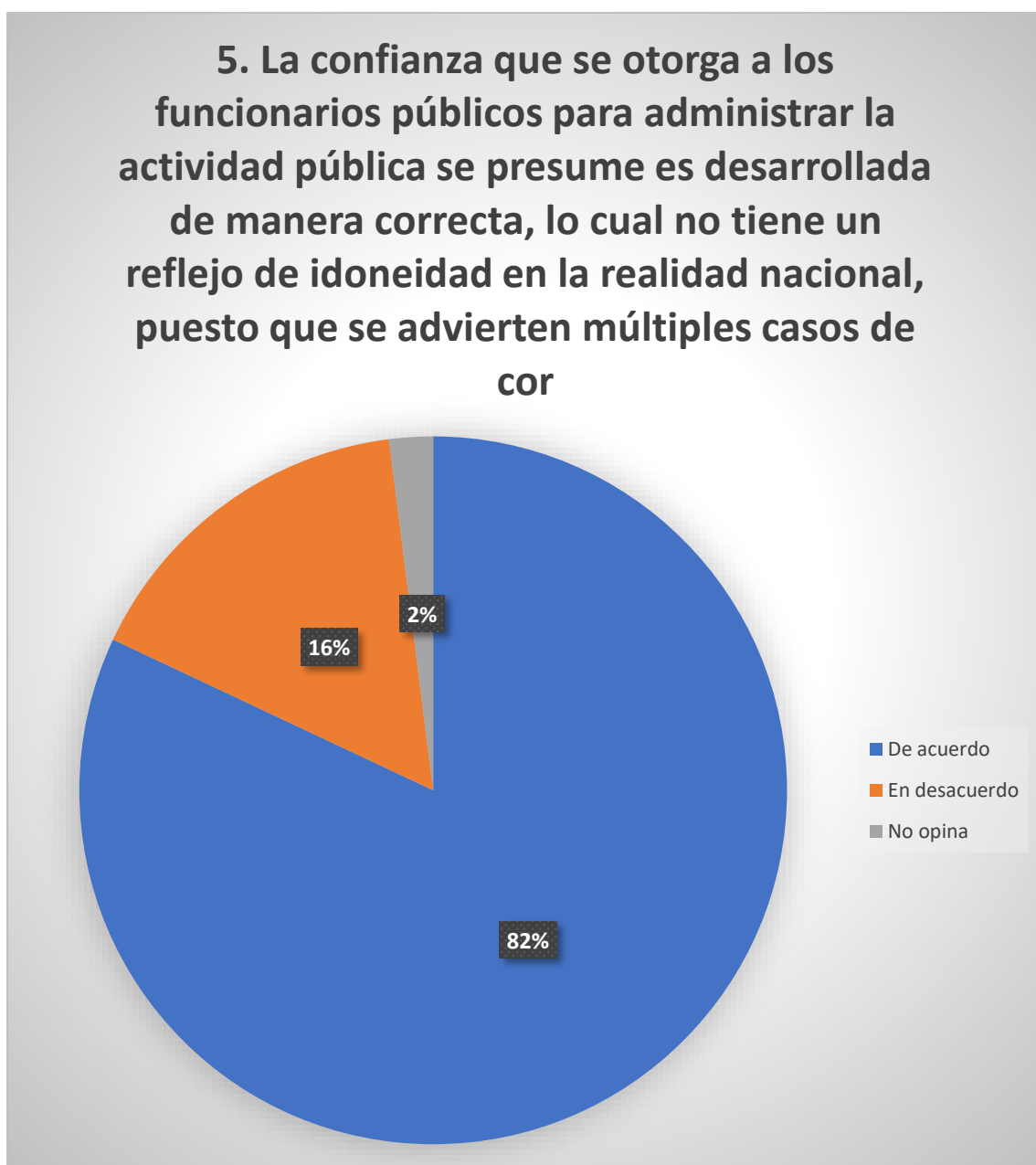


*Tabla 12: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”*

5. La confianza que se otorga a los funcionarios públicos para administrar la actividad pública se presume es desarrollada de manera correcta, lo cual no tiene un reflejo de idoneidad en la realidad nacional, puesto que se advierten múltiples casos de corrupción.

Alternativas	Respuestas
d. De acuerdo	41
e. En desacuerdo	08
f. No opina	01
Total	50

Ilustración 11: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”



*Tabla 13: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”*

6. Para garantizar la correcta administración pública el Estado deberá ejecutar acciones estratégicas que irán desde la revisión de los tipos penales que se ocupan de proteger este bien jurídico, hasta el reforzamiento de los órganos de control para limitar los índices de corrupción.

Alternativas	Respuestas
d. De acuerdo	48
e. En desacuerdo	01
f. No opina	01
Total	50

Ilustración 12: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”

**6. Para garantizar la correcta administración pública el Estado deberá ejecutar acciones estratégicas que irán desde la revisión de los tipos penales que se ocupan de proteger este bien jurídico, hasta el reforzamiento de los órganos de control para limit**

